

XVII JORNADA DE DEBAT
HIPOTEQUES I DESNONAMENTS.
I ARA, QUÈ?



ASSOCIACIÓ D'AMICS UAB
/ fragments 16

Els textos d'aquesta publicació són extractes de les ponències que van pronunciar els conferencians de la jornada **Hipoteques i desnonaments. I ara, què?**, celebrada el dia 11 d'abril de 2013.

XVII JORNADA DE DEBAT ORGANITZADA PER L'ASSOCIACIÓ D'AMICS DE LA UAB

11 d'abril de 2013

Col·legi de Periodistes de Catalunya (Barcelona)

► PRESENTACIÓ I MODERACIÓ

Joan Botella,

degà de la facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona.

► INTERVENCIONS

■ **Ada Colau,**

portaveu de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH).

■ **José María Fernández Seijo,**

magistrat.

■ **Antoni Serra Ramoneda,**

catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona.

■ **Santiago Vidal,**

magistrat.



UNIVERSITAT

OPINA

PRESENTACIÓ



JOAN BOTELLA

Bona tarda a tothom i gràcies per la seva assistència. Avui tenim un col·loqui, crec que molt interessant, a partir de les diverses iniciatives ciutadanes que hi ha hagut entorn de la legislació hipotecària espanyola. L'Associació d'Amics de la Universitat Autònoma de Barcelona va creure que seria interessant organitzar un acte on, sota diferents angles, es comentessin els diferents aspectes de l'actualitat. Com que el punt de partida del procés ha estat la remissió d'un cas al Tribunal Europeu per part d'un jutge del mercantil, el senyor José María Fernández Seijo, seria lògic que comencéssim per aquí; després sentirem la senyora Ada Colau, com a portaveu de la Plata-

forma d'Afectats per la Hipoteca; seguidament el senyor Antoni Serra Ramoneda, catedràtic emèrit d'Economia de l'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, i finalment el jutge Santiago Vidal, que serà qui tancarà la roda de presentacions inicial.

S'ha previst un paper perquè les persones que vulguin formular una pregunta o un comentari durant la sessió, ens la facin arribar a la mesa. No m'allargo més i comencem el debat agraït a tots ells i a vostès la seva presència. Dono la paraula en primer lloc al senyor José María Fernández Seijo, jutge del mercantil de Barcelona ■

PONÈNCIES

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Buenas tardes, primero quiero agradecer muchísimo a la Universidad Autónoma la invitación, y sobre todo en un sitio como el Colegio de Periodistas, porque creo que hay que agradecer, por una parte a las plataformas de afectados y por otro a los medios de comunicación, la capacidad que han tenido, en largos años de movilización, de convertir el problema de las ejecuciones hipotecarias en la imagen, en el rostro humano de la crisis en España. Yo creo que cada país que se ha visto afectado por la crisis económica ha tenido una imagen paradigmática, y creo que en el caso de España ha sido la de las ejecuciones hipotecarias.

Es una tragedia, en términos casi teatrales, en la que conviven lo que en su momento fueron los sueños de riqueza de un país y las malas prácticas: la gente que quería comprar un piso y que pedía un préstamo, los préstamos que se iban prolongando durante muchos años, las malas prácticas en la concesión de préstamos, la excesiva severidad de las entidades financieras, los problemas de funcionamiento de los juzgados... Entonces hay un elemento simbólico que hace que en julio del año 2011, cuando se eleva la pregunta al Tribunal de Luxemburgo, la noticia no merezca ninguna consideración. Tengo algún buen amigo periodista al que mandé por *e-mail* la pregunta que yo le hacía al Tribunal, y la verdad es que consideró que no era una pregunta importante, que era una cuestión más bien técnica. Pero en esos diecisiete o dieciocho meses, vemos como esta cuestión de técnica jurídica se ha convertido en un fenómeno social, y por lo tanto en un elemento emocional.

Yo creo que cada país que se ha visto afectado por la crisis económica ha tenido una imagen paradigmática, y creo que en el caso de España ha sido la de las ejecuciones hipotecarias.

Hay muchos factores emocionales y simbólicos en este debate, que creo que no son malos, sino todo lo contrario. A partir de ahí les cuento. La crisis empezó a finales del año 2007 y hoy hemos conseguido, ya superado el primer trimestre del 2013, tener una cifra cierta, y es que los registradores de la propiedad han dicho esta mañana que cada día en este país, en España, se realizan 115 ejecuciones hipotecarias que afectan a vivienda. Es decir, que 115 familias, cada mañana, de lunes a vier-

nes, son lanzadas de su domicilio. Si lo proyectamos al inicio de la crisis, y calculamos el número de personas afectadas, tres o cuatro personas por familia, estaríamos hablando de un problema que afecta a millones de personas.

Si lo proyectamos al inicio de la crisis, y calculamos el número de personas afectadas, tres o cuatro personas por familia, estaríamos hablando de un problema que afecta a millones de personas.

Creo que tenemos un segundo dato importante, que también es macroeconómico, y es que nos dicen que los consumidores españoles son de los mejores pagadores del mundo, y los particulares dicen que la morosidad en el pago de los préstamos bancarios apenas llega al 4%. Es decir, que estamos a 115 lanzamientos diarios por una morosidad del 4%. Si no tenemos perspectivas de salir de la crisis, imaginen la proporción aritmética que podrá ser en los próximos meses. Por lo tanto, estamos hablando de una tragedia que tiene cara y ojos.

Creo que aquí lo importante es sobre todo escucharnos, no hablar, sino que nos escuchemos. Yo les cuento primero algunos datos complementarios, ya de mi mundo, del mundo judicial. Lo primero es que en este país, desde finales del siglo XIX, en las demandas que se interponen para recuperar las garantías que se dan en los préstamos, lo que llamamos nosotros *ejecuciones hipotecarias* y lo que comúnmente se llaman *desahucios*, en este país, hasta ahora, hasta hoy, no se ejecutaban personas, sino que se ejecutaban inmuebles, fincas. Los procesos de ejecución hipotecaria están vinculados a número registrales, y de hecho, hasta el año 2001 la ejecución hipotecaria no estaba en normas procesales, sino en la Ley Hipotecaria. Por lo tanto, es normal que los jueces no conozcamos, no tengamos ningún instrumento legal, hasta hoy, para saber a quién estamos ejecutando.

Segunda cuestión que creo que es importante y que tiene que ver con la terminología: *ejecución*. Claro, para cualquiera de ustedes, fuera del lenguaje técnico forense de los juzgados, *ejecución* tiene unos elementos peyorativos inmensos. Se llama al *ejecutado*, estamos hablando de *desahucios*. A cualquiera de ustedes que fuera a un profesional y le dijera «está usted desahuciado», en se-

guida le entrarían los siete males. Esta es una terminología que arrastramos de una vieja literatura y de una vieja forma de pensar, en la que los deudores no tenían derechos y sólo tenían obligaciones, y además se les trataba de una manera peyorativa. En las resoluciones judiciales, cuando un juez acuerda un desahucio o un desalojo, todavía dice que el inmueble debe quedar «libre, vacuo [sin nada por el medio] y expedito». O sea, que el propietario tiene la posibilidad de entrar por los pasillos sin chocarse, sin que nada le moleste, pasar sin que ni las zapatillas de los críos le molesten. Con lo de «libre, vacuo y expedito», fíjense ustedes que estamos usando una terminología que probablemente nos entronque con Balzac, nos entronque con Flaubert, aquí en España con la Pardo Bazán, pero que es una terminología que está muy vacía de sensibilidad con los conflictos.

Los consumidores españoles son de los mejores pagadores del mundo, y los particulares dicen que la morosidad en el pago de los préstamos bancarios apenas llega al 4%. Es decir, que estamos a 115 lanzamientos diarios por una morosidad del 4%.

A partir de aquí, la cuestión que se plantea es ver si en ese mundo de ejecuciones, de ejecutados, de lanzamientos, habría posibilidades de introducir un poco, no de sentido común, pero sí de introducir garantías. Hay un compañero, Guillem Soler, magistrado de un juzgado de Sabadell, que creo que abrió un campo muy ilusionante de actuación, y es que hace tres años, desde el juzgado de Sabadell, planteó al Tribunal Constitucional si el proceso de ejecución hipotecaria era un proceso que podía o no vulnerar los derechos fundamentales de la Constitución. Y el Tribunal Constitucional, después de estar rumiando durante varios meses –creo que incluso llegó a dos años– se despachó con un auto de inadmisión, en el que dijo que ya en el año 1981 el Tribunal Constitucional había dicho que los procedimientos de ejecución hipotecaria eran conformes a la Constitución.

Cuando la gente que estamos en el mundo del derecho nos leemos la sentencia del Tribunal Constitucional del año 1981, vemos que el magistrado ponente, que era Fernando García-Mon, un viejo abogado madrileño, dijo que como era una ley ya no sólo preconstitucional, sino que era una ley prehistórica –porque esta sí que era una

ley de 1909, la Ley Hipotecaria–, los posibles defectos de constitucionalidad que tuviera la norma se debían salvar si los jueces hacían una interpretación conforme a la Constitución. De manera que no es verdad que el Tribunal Constitucional dijera que el procedimiento de ejecución hipotecaria se adaptaba al texto del año 78, sino que los jueces, en el año 81, es decir, tres años después de la aprobación de la Constitución, tenían que hacer un esfuerzo interpretativo para que una norma napoleónica tuviera un sentido constitucional.

Tienen que pensar que una de las grandezas de la ejecución hipotecaria es que como ejecutabas inmuebles, los juzgados se contentaban con grapar un edicto en el poste de teléfono o en la puerta del inmueble. Por lo tanto, no había ningún deber legal de que alguien recibiera ese papel. Lo importante era el inmueble, y piensen que estamos hablando de los derechos reales, y todo lo real suena serio, suena circunspecto. Los derechos reales se oponen a los derechos personales. Cada uno tiene derechos personales, que son derechos de los que lleva en los bolsillos, y los derechos reales son la casa, el suelo, la propiedad... Lo importante era que quedara bien grapado el edicto para que lo viera todo el mundo.

Es una terminología que arrastramos de una vieja literatura y de una vieja forma de pensar, en la que los deudores no tenían derechos y sólo tenían obligaciones, y además se les trataba de una manera peyorativa.

A partir de ahí la cuestión era, primero, saber si en la compraventa de un inmueble una de las partes no tenía capacidad de negociar, si no tenía capacidad de poder limar, de poder adaptar, si un comprador de un inmueble era un consumidor... Y eso lo hacíamos porque desde el año 1984, en España, habíamos ido creando a partir de la Ley General de Defensa la idea de que uno era consumidor cuando entraba en un bar, pedía una ensaladilla y se intoxicaba; si uno se compraba un coche y se le filtraba el agua cuando llovía, o cuando compraba unas zapatillas a los críos y al segundo día en el patio se le descoñan. Es decir, que había una cultura de tutela del consumidor en las cosas pequeñas, pero no había una cultura de la tutela del consumidor cuando se producían compras más grandes. Y de hecho entre esas compras más grandes, la decisión económica, la decisión jurídica más

importante que puede llevar a cabo una persona corriente en su vida, es la de comprometer su patrimonio, durante un plazo que inicialmente fue de quince años, luego de veinte, luego subía a treinta, luego a cuarenta, es decir, que se hipotecaba de por vida. Llegó un negocio jurídico extremadamente complejo y que además era la compra de un bien. Por lo tanto había que ver si el deudor, si el ejecutado, el comprador, era consumidor. Si era consumidor, el siguiente paso que había que hacer era que a ese señor le debíamos dar el mismo tratamiento, las mismas garantías, que si compraba un yogur caducado –aunque ahora dicen que los yogures no caducan–. Pero imaginen ustedes los mecanismos de producción que tenemos cuando consumimos un producto en mal estado, o cuando vamos a comprar en un almacén una camiseta que cuando nos la ponemos se descose: sabemos que al día siguiente nos la van a devolver. Y que si se nos vuelve a descoser nos darán un tique. Costará que nos devuelvan el dinero, pero hay una cultura del consumidor en las cosas pequeñas.

Una de las grandezas de la ejecución hipotecaria es que como ejecutabas inmuebles, los juzgados se contentaban con grapar un edicto en el poste de teléfono o en la puerta del inmueble.

En Europa, a finales del siglo pasado (la directiva ha cumplido ahora veinte años, la semana pasada), coincidiendo con una época en la que los gobiernos europeos creían en Europa y creían que Europa volvería a tener también un rostro humano, de esa época hay una serie de direcciones comunitarias en materia de tutela de los trabajadores, en materia de la tutela de algunos derechos del ámbito penal, y también hay una directiva de consumidores, la directiva 13/93. Y es una directiva que incorpora un catálogo de cláusulas que se consideran abusivas. Aquí hemos tenido la mala fortuna de que siempre que hemos tenido que cumplir con directivas comunitarias, el partido que está en el gobierno es un partido de derechas con mayoría absoluta. Son coincidencias. En el año 93, los deberes que pone la Unión Europea son adaptar la directiva en el año 95, y en ese momento se adapta la directiva, se traslada a la ley del año 98, la Ley de condiciones generales de contratación, y allí se decide que la tutela de los consumidores la deberían hacer los registradores de la propiedad y los registradores mercan-

tiles. Había un control administrativo de las cláusulas abusivas. Una de las dudas que se planteaban era que no sólo es importante tener derechos, no sólo es importante saber qué catálogo tenemos de cláusulas abusivas, sino que también es importante saber si hay un mecanismo específico de tutela, de protección de estas cláusulas, es decir, instrumentos procesales. De nada nos sirve tener un motor muy potente si no tenemos un vehículo que nos permita utilizarlo en carretera.

Había una cultura de tutela del consumidor en las cosas pequeñas, pero no había una cultura de la tutela del consumidor cuando se producían compras más grandes.

Y el legislador español, en el año 2000 –y ahí volvíamos a tener otra vez un gobierno conservador y con una mayoría bastante amplia–, cuando reforma la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley 1/2000, considera que a los consumidores se les debe tutelar a través de acciones colectivas, pero deja muy débiles las acciones individuales, no modifica el proceso de ejecución. ¿No modificar el proceso de ejecución qué quiere decir? Pues que cuando un juez tiene que ejecutar, ejecuta una garantía: yo pido un préstamo para comprar un piso, pido el préstamo al banco, y como el banco no se fía de que yo pueda pagar ese préstamo con mi dinero, ofrezco una garantía, que es ahora el propio piso.

Históricamente, la hipoteca servía para invertir, era un instrumento en el que la garantía era distinta de lo que comprabas. Por eso a mis padres nunca se les ocurrió comprar un piso con un préstamo hipotecario, porque la hipoteca no estaba pensada para adquirir primera vivienda, sino que estaba pensada para comprar solares, grandes extensiones de tierra, para promotores, para constructores... Entonces, nuestro sistema jurídico, que es un sistema de origen latino, lo que dice es que una cosa es el préstamo y otra cosa es la garantía. Y la garantía se puede ejecutar aisladamente. De manera que cuando un juez examina una ejecución hipotecaria, lo que examina es si la garantía es correcta, es decir, si está en documento público, si ha intervenido un notario, si las cifras son más o menos correctas, pero no sabe si hay un préstamo o no hay un préstamo. Entonces eso hace que el procedimiento de ejecución sea extremadamente severo. Cualquier problema que tenga el préstamo no puede ser

examinado en el proceso de ejecución, y por eso al ejecutado no se le permite explicar que a lo mejor en el préstamo le engañaron o le incluyeron una cláusula abusiva, no le explicaron bien las cosas, le introdujeron algún elemento de distorsión...

Aquí hemos tenido la mala fortuna de que siempre que hemos tenido que cumplir con directivas comunitarias, el partido que está en el gobierno es un partido de derechas con mayoría absoluta. Son coincidencias.

Por lo tanto, la pregunta que se le hacía al Tribunal de Justicia era, primero: ¿Tiene sentido que el juez no pueda analizar las circunstancias y condiciones del contrato antes de las ejecuciones? ¿Tiene sentido que el deudor/consumidor pierda la vivienda para luego poder defenderse? La segunda pregunta que se hace es: ¿Los jueces tienen el deber de tutelar al consumidor? Es decir, ¿es necesario que cada vez que tenemos un procedimiento judicial iniciado por una entidad financiera el consumidor tenga que venir al juzgado y pedir que se activen los mecanismos de protección? ¿O en un estado social de derecho, los poderes públicos, y por lo tanto los jueces, tienen la obligación de examinar de oficio, es decir anticipar y proteger al consumidor, sin necesidad de molestarle? Y lo tercero que nos dice es que hay estándares para identificar las cláusulas abusivas, es decir que no es necesario realizar un juicio de valor profundo sobre los contratos, porque en la práctica judicial y en la práctica legal hay el catálogo con cláusulas, que ya se entiende que son completamente abusivas y que vienen en las leyes. Nosotros, en la ley del 2007, en el texto refundido de la ley de consumidores, tenemos cerca de cincuenta cláusulas abusivas, es decir que cualquier contrato en el que hubiera una cláusula abusiva, sería nulo de pleno derecho.

El Tribunal de Justicia, desde el verano del año 2000, y a raíz de algunas preguntas realizadas ya por jueces españoles, había dicho cosas interesantes. La primera que dice es que los poderes públicos tienen que plantear una intervención positiva. ¿Qué es una intervención positiva? El consumidor es un señor que se encuentra en una situación de desequilibrio total, y esta situación de desequilibrio total tiene que ver con el acceso a la información, con la comprensión de la información y con la

capacidad de negocio. Esa situación de desequilibrio es tan profunda que el 90% de los consumidores ni siquiera tienen la capacidad de decidir si les merece la pena tener que desplazarse ante un tribunal para tutelar sus derechos.

En el 90% de los procedimientos judiciales, el deudor es un señor que queda en lo que nosotros llamamos *posición procesal de rebeldía*; no quiere decir que sea un rebelde que vaya dando voces por la calle, sino que decide no acudir al juzgado. Por lo tanto, el tribunal, en esta sentencia de junio del año 2000, lo que dice es que los jueces civiles tienen que facilitar la tutela, tienen que controlar de oficio las cláusulas abusivas y tienen que eliminarlas. Eso lo dice el tribunal en el año 2000, con la sentencia Océano. Lo dice otra vez en la sentencia Cofidis, lo dice en junio del año pasado en la sentencia Banesto, cuando un juez catalán, Xavier Pereda, pregunta: «¿Si yo veo una cláusula abusiva, la puedo modular?», «¿una cláusula del 23% la puedo rebajar al 11%?». Y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en la sentencia Banesto, le dijo: «Si la cláusula es abusiva, usted la elimina. Y el banco reclamará el principal y los intereses se eliminan de lleno». Hay una sentencia más reciente, del Tribunal Supremo español, del 22 de febrero del año 2013, en la que unos intereses abusivos, sin necesidad de irnos a la tutela de los consumidores, un interés del 22%, se declara usurario, y se anula todo el préstamo hipotecario y se dice que quien ha prestado dinero tiene derecho a recuperarlo, pero a lo que no tiene derecho es a ejecutar la garantía; lo recuperará yendo a un proceso de reclamación, buscando bienes, pero no con la severidad del proceso de ejecución hipotecaria. Y lo que dice, y con eso termino, la sentencia del 14 de marzo del año 2013, es que el hecho de que un ordenamiento jurídico tenga la capacidad de indemnizar por los posibles daños y perjuicios por situaciones de abuso o de desequilibrio, no es suficiente cuando se pierde la vivienda. Es decir, que la vivienda, la primera residencia, tiene unos elementos objetivos y subjetivos que hacen que el daño que se produce por su pérdida sea difícilmente indemnizable. Y sobre todo, no puede ser indemnizado en dinero.

Esa sentencia lo que determina es, primero: que antes de ejecutar, antes de lanzar, deberíamos tener la capacidad de escuchar al consumidor, al deudor, para que nos diga en qué condiciones ha contratado. Es decir, que ya no

ejecutamos números registrales, sino que estamos ejecutando viviendas en las que viven personas. Por lo tanto, hemos de escuchar a esas personas. Lo segundo que nos dice esa sentencia es que para escuchar a esa persona con cierta serenidad, no puede estar pendiente el lanzamiento. Se deben suspender los lanzamientos programados para poder tutelar suficientemente a los consumidores. Y lo tercero que nos dicen, intervención positiva, es que el consumidor no tiene el deber de acudir al juzgado. Por lo tanto, el estado debería tener los mecanismos para que se produjeran revisiones de todas las ejecuciones que estén en trámite, para que el juez pueda depurar aquellas cláusulas más burdas, más abusivas. A partir de allí, desde el anterior gobierno, sí que se habían introducido algunos mecanismos de modificación de las leyes procesales, pero siempre habían sido remedios ínfimos, eran apenas tiritas para hemorragias profundísimas.

El 90% de los consumidores ni siquiera tienen la capacidad de decidir si les merece la pena tener que desplazarse ante un tribunal para tutelar sus derechos.

Ya no estamos hablando de los problemas sociales del paro, sino que estábamos hablando de que teníamos un procedimiento de ejecución hipotecaria que era profundamente injusto desde la perspectiva del derecho comunitario. Y mientras que los sucesivos gobiernos tenían capacidad para modificar leyes e incluso por la vía de los

reales decretos, de un día para otro —¿cuántos reales decretos se aprobaban un viernes y entraban en vigor un sábado?—, sin embargo, en materia de tutela de consumidores, todo se había ido aplazando. Yo recuerdo que al final de la anterior legislatura crearon una comisión de expertos para analizar los problemas de la ejecución hipotecaria en España, en el año 2011. Y nunca se han adoptado medidas de suficiente calado.

Aquí entramos en la capacidad que han tenido los movimientos sociales, por una parte, y los medios de comunicación, por otra, para modificar las agendas. Yo creo que sin el esfuerzo de las plataformas y sin la colaboración de los medios de comunicación, lo poco o mucho conseguido hasta hoy hubiera sido imposible. Hubiéramos seguido reunidos en comisiones de expertos, hubiéramos hecho libros verdes y libros blancos, propuestas, pero estaríamos todavía en un callejón sin salida. Y probablemente, la cuestión prejudicial hubiera sido objeto de estudio en las universidades y no hubiera sido objeto de debate. Yo por eso les cuento mi experiencia, y además les explico que desde la perspectiva del derecho comunitario, en Europa la única respuesta razonable era la que habían dado. O sea que era previsible. Por lo tanto, los sucesivos gobiernos desde junio del año 2011, cuando se plantea la cuestión, hasta abril del año 2013, deberían haber tenido la capacidad para haber establecido un marco jurídico seguro y fiable, ante una previsible sentencia que iba a ser extremadamente dura. Muchas gracias ■



ADA COLAU

Moltes gràcies també per organitzar aquest debat i per convidar-nos, i vull agrair també al magistrat Seijo el reconeixement de la tasca de les plataformes d'afectats i dels mitjans de comunicació, i em sumo a aquest reconeixement, però també hem de fer un reconeixement a alguns jutges, i en especial al magistrat Seijo, que ha estat dels pocs que des del principi, i no només en els darrers dos anys, ha estat la veu crítica i ha estat assenyalant el problema. El febrer del 2009 a Barcelona, que és quan neix la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, el problema estava absolutament invisibilitzat, no se'n parlava als mitjans de comunicació, no existia, l'Administració pública fins i tot el desconeixia profundament. Aquesta és una de les coses que ens va sobtar, i quan vam començar a parlar-ne, se'ns va tractar de demagogs, d'ignorants, d'alarmistes. I de les poquíssimes veus expertes que vam trobar, que no només estaven denunciant la problemàtica, sinó que a més des del primer dia van ser molt accessibles i ens van ajudar moltíssim a comprendre el problema des del punt de vista jurídic, una d'aquestes veus va ser la del magistrat Seijo. És a dir, que no és una casualitat que hagi estat protagonista del tema d'Europa, sinó que hi ha una feinada històrica al darrere que és important que es reconegui.

Quan neix la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, el problema estava absolutament invisibilitzat, no se'n parlava als mitjans de comunicació, no existia, l'Administració pública fins i tot el desconeixia profundament.

Es podria parlar moltíssim, però més val que ho acotem, ens han demanat que ens centrem sobretot en l'anàlisi del moment que tenim ara i en les propostes, i ho trobo molt encertat. Quedarà pendent un tema important (avui no el tocarem), la manera com s'ha gestat tot això. Nosaltres venim dient aquesta frase que s'ha dit a moltes manifestacions: «Això no és una crisi, és una estafa». I creiem que el tema hipotecari en concret, i en general el tema de l'habitatge, té molts elements que ho visualitzen, perquè en la població hi ha aquesta sensació cada cop més generalitzada d'estafa i no de crisi. Perquè hi ha una poca gent que ha decidit unes normes del joc que han beneficiat molt una minoria, i a una gran majoria els ha empobrit fins al límit que estem perdent drets bàsics que no ens hauríem pensat mai de perdre.

Però bé, avui no entrarem en el tema de les causes, tot i que és molt important, (sobretot perquè si parlem de propostes, s'ha de parlar del que no s'ha de tornar a fer un altre cop, no tornar a caure en els mateixos errors, i per tant, s'hauria d'entrar també en les causes), però ens centrarem ara ja més en les propostes, perquè hi ha poc temps.

A la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, ara ja més o menys tothom ens coneix i sap quines són les nostres propostes de mínims. Ens ha costat una miqueta, però darrerament ja hem aconseguit que estiguin en el centre del debat. És important assenyalat aquest paper que ha tingut la societat civil en general, no només la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca: ha liderat la denúncia i la visibilització del problema, i també ha posat les propostes sobre la taula. Des del principi, la plataforma comença a treballar, a convocar reunions amb persones afectades, i des del principi vénen desenes i desenes de persones, i veiem que el problema és fins i tot més gran del que havíem pensat al principi. I ràpidament s'identifica que aquí tenim un problema econòmic, tenim una anomalia jurídica, perquè en cap país del nostre voltant està passant el que està passant a l'Estat espanyol.

S'identifica que aquí tenim un problema econòmic, tenim una anomalia jurídica, perquè en cap país del nostre voltant està passant el que està passant a l'Estat espanyol.

Però, per concentrar el que és el problema d'emergència, la problemàtica més greu, són dues coses. Una és el tema del deute, és a dir un procediment d'execució que no preveu res, que no deixa mesurar res al jutge, no només les pràctiques abusives, sinó tampoc quina és la situació de la persona, si ha deixat de pagar perquè vol o perquè no pot, si està a l'atur, si té fills, si està malalt..., res. No pot valorar absolutament res. És igual, també, si és un primer habitatge, si la família té un altre lloc on anar o si hi ha altres propietats. Res de tot això es valora en el procediment. És un procés d'execució i una persona executada no pot defensar-se i no pot parlar.

I fruit d'aquest procediment d'execució, a l'Estat espanyol resulta que les persones no liquiden aquest deute amb el bé hipotecat, amb la garantia, sinó que si la subhasta queda deserta, que és el que ha passat per primer

cop en aquesta crisi de manera massiva, el banc s'adjudica l'habitatge, ara mateix, pel 60%, i queda un deute, perquè els interessos de demora, en els productes judicials, són elevadíssims, realment usuaris, com ara s'està dient. Queda un deute de partida, un deute que segueix creixent i que a la pràctica és la condemna, la mort civil de les persones. Converteix les persones en proscrites, vol dir que no només et poden embargar una part de la nòmina, els teus comptes corrents, les coses al teu nom per a tota la vida, sinó que el teu nom està en vermell a tots els fitxers de morositat, que són d'accés públic, i per tant t'inhabilita per a qualsevol activitat econòmica: tenir qualsevol cosa al teu nom, com ara herències, però fins i tot activitats tan petites i quotidianes com contractar una línia telefònica o coses tan necessàries com llogar un pis, accedir a una feina o accedir a ajuts públics. Hi ha persones que no poden accedir a un pis de protecció oficial perquè són moroses, així que el mateix estat les discrimina, no les considera subjectes, per no considerar-les de fiar. Per tant, és la mort civil.

El primer problema és aquest, el tema del deute. I a més una cosa que és important de recordar; ara amb tot això de la crisi hem aconseguit una mica de situar-la al davant, però abans tota la culpa era de les persones hipotecades. Es deia que ningú els havia obligat, ningú els havia posat una pistola al cap... Realment, el lloguer en aquest país no és una alternativa real, a diferència d'altres països europeus. A més, no és veritat que les dues parts siguin iguals. Hi ha una part que necessita l'habitatge perquè és una necessitat bàsica de l'ésser humà, no és cap caprici, no és una cosa de la qual pugués prescindir, tothom necessita un habitatge. I per altra banda, hi ha la part forta, que és qui posa les condicions del contracte, i aquest contracte no és veritat que es negociï entre les dues parts, és un contracte d'adhesió, que redacta l'entitat financera i tu o ho agafes o ho deixes.

Els notaris no han fet bé la seva funció, claríssimament, i tothom ha passat per aquesta experiència. No han explicat aquests contractes, no han explicat aquestes clàusules. Això és important recordar-ho, perquè milers i milers de persones, la gran majoria les persones que han firmat hipoteques en els darrers deu anys, en l'època de la gran bombolla immobiliària, no sabien què estaven signant, i no van ser informades adequadament. És diferent apel·lar a una responsabilitat quan se t'ha informat

degudament que quan no se t'ha informat. I és clar, no seria acceptable dir que per accedir a un dret de primera necessitat tothom hagi de ser llicenciat en Dret i en Econòmiques, això tampoc seria adequat. Una altra qüestió important, també, és recordar que aquests contractes estan fets amb un llenguatge intel·ligible. És a dir, que disfressat de tecnicisme, es fa un contracte absolutament obscurantista, i evidentment es fa amb la voluntat d'amagar la realitat. Perquè en realitat el contracte, quan te l'expliquen, és senzill de comprendre. Si m'expliques què vol dir la clàusula sòl, s'entén perfectament, si hi ha voluntat que s'entengui.

La gran majoria les persones que han firmat hipoteques en els darrers deu anys, en l'època de la gran bombolla immobiliària, no sabien què estaven signant, i no van ser informades adequadament.

En canvi, aquestes clàusules –la dels interessos de demora abusius, la dels costos judicials, el tema de la subhasta, totes aquestes coses– estan escrites amb un llenguatge que o un tècnic amb molta voluntat t'ho explica bé, o tu sol, llegint-ho, d'entrada, difícilment ho entendràs. Per això, insistim, a l'hora de parlar de responsabilitats, de com s'ha gestat i per què parlem d'estafa, recordar aquests elements que és important.

Aleshores ens trobem amb aquest problema del deute, amb milers de persones que no sabien que havien assumit aquest risc. Aquest és un element important per entendre l'impacte que té això, socialment, en les persones afectades. Una cosa és que a tu et passi una cosa que sabies que remotament et podia passar, i una altra cosa és que, de cop, et passi alguna cosa traumàtica, que no tenies ni idea que et podia passar, perquè ningú no t'ho havia explicat i ni t'ho havies plantejat. Milers de persones, gent de tot tipus, gent jove, gent gran, que, amb aquesta crisi, en molt poc temps passen de la més absoluta normalitat a trobar-se amb el problema. Pensem que el 2006 el 90% de la població accedeix al règim de la propietat privada, perquè són molts els incentius que es fan cap a la hipoteca i no cap al lloguer, amb polítiques públiques molt agressives: es desgrava fiscalment la compra i no es desgrava el lloguer, el lloguer és de mala qualitat i és inestable, es liberalitza el crèdit, tot són facilitats per hipotecar-se... Amb aquestes condicions, re-

sulta que el 2006 el 90% de la població accedeix a tenir la propietat de l'habitatge, és a dir tothom: immigrants, autòctons, joves, grans... Tota mena de professions, classe baixa, classe mitjana...

El 2006 el 90% de la població accedeix al règim de la propietat privada, perquè són molts els incentius que es fan cap a la hipoteca i no cap al lloguer.

Estem dient que tots aquests milers i milers de persones de tota mena accedeixen a un bé de primera necessitat amb tota normalitat, amb feina remunerada, amb un sou més o menys adequat, treballen, formen una família... L'estat no només fa incentius, sinó que explícitament els responsables del govern, tant els uns com els altres, et diuen que el millor que es pot fer en aquest estat és comprar un habitatge, perquè és una inversió segura, i això t'ho diuen el president del govern i els ministres d'Habitatge. Et diuen que el millor que pots fer és comprar-te un habitatge, perquè mai baixarà de preu, perquè no hi ha bombolla immobiliària. Fins que va esclatar la bombolla, l'estat en negava l'existència. Amb això, altra vegada parlem d'estafa i no parlem de crisi.

En aquest context, la gent que fa el que fa tothom, el que l'estat li està recomanant que faci: treballar, formar una família i comprar-se un habitatge, en molt poc temps es troba amb una crisi monumental; es paralitza l'economia, i això vol dir atur, i amb això el primer fet traumàtic: perdre ingressos. A més, en aquesta societat tan materialista i consumista com la nostra, perdre la capacitat econòmica és també perdre l'estatus social. Vull dir que el fet de no tenir capacitat econòmica t'inhabilita pràcticament com a ciutadà. Com que la principal despesa de totes les famílies és la hipoteca, si perds els ingressos, el primer que no pots pagar és l'habitatge; t'enfrontes al drama, en molt poc temps, de poder perdre l'habitatge perquè no el pots pagar. I a sobre descobreixes una cosa que no sabies, i és que et quedes amb un deute per a tota la vida, un deute irrecuperable que, facis el que facis, o et toca la loteria o és impossible que el saldis. Perquè a la pràctica estem parlant de deutes de 100.000, 200.000 euros, que segueixen generant nous interessos després de l'execució i que són insaludables en el context de crisi actual. I és clar, imagineu l'impacte en les persones.

Aleshores, com deia, en el moment que comencem amb la plataforma, tot això està invisibilitzat, i no ho coneix ni la mateixa Administració. Ens trobem primer això, aquesta anomalia jurídica, aquesta condemna per a tota la vida amb el problema del deute. I per altra banda, ens trobem amb l'altra anomalia: Espanya és el país d'Europa que més habitatges ha construït en els darrers anys, amb molta diferència. És el país on més es desnona i que menys habitatges socials té, i també és l'estat que més milions d'habitatges buits acumula. Aleshores trobem que tenim milions d'habitatges buits que augmenten amb les execucions hipotecàries i les fallides immobiliàries, que s'acumulen sobretot en mans d'aquestes entitats financeres. I tenim més desallotjaments que cap altre país d'Europa, és a dir, que és molt absurd, és una cosa que no té cap mena de sentit. Milers i milers de famílies al carrer, i milions de pisos buits fent-se malbé, amb els problemes que això comporta, ja no només per a les persones afectades i desnonades. Fins i tot, problemes de gestió per a la comunitat de veïns: pisos fent-se malbé, entitats financeres que no paguen les despeses de la comunitat, etcètera.

Espanya és el país d'Europa que més habitatges ha construït en els darrers anys, amb molta diferència. És el país on més es desnona i que menys habitatges socials té, i també és l'estat que més milions d'habitatges buits acumula.

El problema de l'habitatge és evidentment molt més ampli, però ens trobem amb un problema d'autèntica emergència. I davant d'aquests dos grans problemes d'emergència, identifiquem mesures de xoc. Estem davant d'una situació excepcional i calen mesures urgents, excepcionals, per encarar aquests dos problemes. I és així com identifiquem les tres demandes de mínims, que són les que hem estat reivindicant durant aquests més de quatre anys, i que finalment han quallat en la iniciativa legislativa popular que ha arribat al Congrés. Això és, per una banda, la dació en pagament retroactiva en els casos d'habitatge habitual, no en qualsevol cas. Les entitats financeres han intentat desacreditar-nos dient que nosaltres som uns irresponsables, que volem enfonsar l'economia i que volem que ningú no hagi de respondre dels deutes; això ha estat sempre fals, i ho saben, però intenten desacreditar les veus crítiques, perquè defensen

uns interessos empresarials. És fals que nosaltres diguem que ningú hagi de respondre dels seus deutes. El que estem dient és que, en els casos d'habitatge únic i habitual, i de deutors de bona fe —una cosa que està perfectament regulada en països més civilitzats—, sigui suficient l'entrega de l'habitatge per saldar el deute.

No només és una qüestió de drets humans, diguem-ne, d'emergència social de la persona afectada, sinó també de responsabilitat del creditor. L'entitat financera va fer una taxació d'aquell pis, i va dir que allò valia X; de fet, van inflar els preus, perquè el negoci era el crèdit. Aleshores, han de ser responsables d'això. Però no pot ser que l'única responsabilitat recaigui en la part més feble, en la que no ha posat les condicions del contracte i que tenia una necessitat bàsica a cobrir. No només és una situació humanitària, és una qüestió de responsabilitat. Bé, doncs això, volem alliberar aquests milers de persones que han passat per aquest procediment absolutament traumàtic.

Nosaltres parlem molt de xifres, del problema de l'habitatge, del problema del deute, però us podeu imaginar que al voltant de tot això hi ha una quantitat de qüestions secundàries, d'efectes colaterals devastadors. És a dir, que aquesta tensió familiar d'estar mesos en un procediment d'execució hipotecària, l'angoixa de no veure la sortida, que vagis a l'Administració i que et diguin que no et poden ajudar de cap manera, això genera tensió familiar, depressió, angoixa, problemes de salut greus i, desgraciadament, suïcidis o intents de suïcidis, etcètera. Així doncs, defensem la dació en pagament retroactiva per alliberar aquestes persones d'aquest deute que considerem, a més, que és il·legítim.

Defensem la dació en pagament retroactiva per alliberar aquestes persones d'aquest deute que considerem, a més, que és il·legítim.

I després, per altra banda, el tema de l'habitatge, que és de sentit comú. Tenim milions de pisos fent-se malbé, que, a més, en una situació de crisi que encara durarà, no tenen una recol·locació en el mercat de manera immediata, així que el més lògic és que compleixin la funció social que estipula l'article 33 de la Constitució espanyola. L'article estableix que la propietat privada és un

dret, però que està limitat a la seva funció social. I clarament, un pis buit fent-se malbé no compleix la seva funció social, i menys en una situació d'emergència habitacional, on milers de persones estan al carrer. Per tant, és de sentit comú que aquests pisos es posin a disposició de qui els necessita, en un règim de lloguer assequible, que no superi mai, com a màxim, el 30% dels ingressos.

Aleshores, demanem que s'aturin els desnonaments d'habitatges habituals fins que es regulin, de manera que tota aquesta gent pugui accedir a aquests pisos buits, especialment aquells que estan en mans d'entitats financeres. Perquè és de sentit comú. Parlem d'unes entitats financeres que —recordem-ho— han estat rescatades després del seu comportament absolutament irresponsable, que ha ensorrat, no només les famílies afectades, sinó l'economia sencera del país. La seva mala gestió l'estem pagant entre tots i totes i estem endeutant el país sencer, amb Europa, per pagar la mala gestió d'aquestes entitats. A sobre, estan rebent milers de milions dels nostres impostos, sense demanar-los a canvi cap tipus de contrapartida social, i això és intolerable. Així, doncs, la primera contrapartida social és òbvia, que aquests pisos es posin a disposició de qui els necessita. I per això demanem aquest parc de lloguer social a partir dels pisos buits que estan en mans de les entitats financeres, començant per aquelles que estan nacionalitzades, com pot ser el cas de Bankia (40.000 milions d'euros dels nostres diners), o Catalunya Caixa, que em sembla que va per 10.000 o 12.000 milions.

Demanem aquest parc de lloguer social a partir dels pisos buits que estan en mans de les entitats financeres, començant per aquelles que estan nacionalitzades.

Bé, resumint els arguments que reforcen aquestes demandes, vull insistir en una cosa que em sembla important de cara a desactivar algunes crítiques interessades del sector financer: no són només demandes humanitàries, com deia, o de drets humans, que ja serien motius suficients per si mateixos. Només per respectar els drets humans de la població ja és suficient. A part d'això, hi ha altres arguments: si no abordem aquesta problemàtica i no la resollem, això anirà augmentant, com explica el magistrat, perquè es van sumant les execucions i els desnonaments, els deutes augmenten i augmenten sense

solució, i a mesura que augmenta aquest problema, augmenta el caos.

En primer terme, és un problema econòmic, a part d'un de drets humans. Perquè un país no surt de la crisi si els seus ciutadans no poden sortir de la crisi. És a dir, que un país no és una entelèquia, no són només els mercats en un sentit abstracte. Cal que la ciutadania tingui una segona oportunitat, si el país vol tenir una segona oportunitat. Aleshores, per això diem que cal també alliberar les persones dels deutes, i de fet, aquestes mesures que tots estem demanant no estan només en països, diguem-ne, especialment d'esquerres. A països tan liberals com els Estats Units, o en altres d'uropeus, hi ha mecanismes o bé de dació en pagament o bé de segona oportunitat, que és una manera més indirecta, una mica més llarga, tutelada per un jutge, però en qualsevol cas, hi ha un mecanisme que permet, en un temps raonable, resoldre els deutes. I això es fa també per motius econòmics, perquè si no, si tu envies milers de famílies a l'exclusió social, i per tant, a l'economia submergida –perquè si a tu et diuen que t'embargaran el sou per a tota la vida, quin incentiu tens per treballar regularment?–, aleshores vol dir més economia submergida, vol dir que es paguen menys impostos, vol dir usuaris perpetus dels serveis socials, que els pressupostos dels serveis socials estaran hipotecats durant una generació sencera. Per tant, problemes econòmics concrets, i vol dir, a més, milers de persones que no tenen cap incentiu per començar una activitat econòmica, vol dir també que no es reactiva el consum, etcètera.

És a dir, que el país té un problema, i no només les persones afectades, que són milions entre els afectats indirectes i directes, perquè també hi ha els avalistes, això afecta molta gent. És un problema de país, no és un problema tan sols de la gent afectada. A part d'aquest caos social –perquè la gent afectada, si no resol el problema, no desapareixerà, són milions de persones que seguiran estant allà i si no es resol hi haurà un problema de conflictivitat social que augmentarà, d'exclusió social, un problema econòmic–, ara també hi ha un problema judicial. De fet, també m'agradaria que opinés el magistrat en el debat, i li faig una pregunta avançant-me al torn de paraula. Amb aquesta sentència que arriba d'Europa, si el Partit Popular, com de moment, malauradament, està dient, no aprova una llei que doni sortida a tota la gent

afectada –de moment la proposta de llei que hi ha sobre la taula no dona sortida en absolut a aquests dos problemes–, la via que queda és, per una banda, l'autotutela dels drets, com ja s'està fent, amb campanyes de desobediència civil d'aturada dels desnonaments que hauria d'aturar l'Administració, però que si no ho fa, doncs ho haurem de fer nosaltres. Les plataformes ja han aturat més de sis-cents desnonaments. Nosaltres seguirem forçant les entitats financeres a negociar dacions en pagament i lloguers socials cas a cas.

Un país no és una entelèquia, no són només els mercats en un sentit abstracte. Cal que la ciutadania tingui una segona oportunitat, si el país vol tenir una segona oportunitat.

Però evidentment, d'altra banda, utilitzarem molt més la via judicial del que l'havíem utilitzat fins ara, perquè ara tenim molt més marge. I de fet, per exemple, ja hi ha jutges que actuen per pròpia iniciativa, i un dels més famosos ha estat aquesta setmana el d'Arrecife, que no només ha aturat el procediment per la sentència europea, sinó que ha decretat la nul·litat del procediment i fins i tot la nul·litat del contracte hipotecari, o sigui, que el seu habitatge ja el té lliure i és seu. Em sembla que ja hi ha més de setze casos que han anul·lat el procediment.

D'altra banda, si no hi ha una sortida política, es judicialitzaria també el conflicte, i els jutjats ja estan col·lapsats; em sembla que es parlava aquests dies de 198.000 procediments oberts, més tots els que ja s'han fet, i que evidentment demanarem que es reobrin i es revisin. Això és un caos judicial. Nosaltres no pensem que aquesta sigui la solució, és a dir, un problema social i econòmic no s'ha de judicialitzar, perquè no és efectiu, a part que és molt car per a l'estat i significa allargar l'agonia durant més temps encara. Però si no hi donen una sortida política, evidentment recorrerem als jutjats.

Aleshores, davant de tot això, hi ha hagut una iniciativa legislativa popular, com sabeu, que ha recollit un milió i mig de signatures, i que ha sigut una mobilització sense precedents en la història de les iniciatives legislatives populars. El Partit Popular no anava a acceptar-la ni a tràmit; en aquesta democràcia tan precària que tenim a l'estat, resulta que tu fas un esforç enorme, amb un munt

de requisits, durant un munt de temps, reculls un milió i mig de signatures i ses senyories ni tan sols estan disposades a debatre aquestes propostes. El Partit Popular, amb la majoria absoluta, anava a impedir el debat, però la pressió social va aconseguir el que semblava impossible un cop més i van haver d'admetre a tràmit la iniciativa.

Ara mateix això està a la comissió d'Economia, però el Partit Popular ha cedit a la pressió de les entitats financeres, ha assumit el discurs d'aquestes entitats amb les seves mentides incloses. Són molt interessants les dades que han sortit avui dels registradors de la propietat, perquè demostren que el que ha estat dient la banca i ha repetit el govern era mentida: ens havien dit que en tots aquests anys només entre 4.000 i 15.000 dels processos d'execució i desnonament hipotecari havien estat de primer habitatge. I ara resulta que els registradors, que no són gens sospitosos tampoc de ser subversius, ens estan dient que només el 2012 més de 30.000 procediments han sigut de primer habitatge.

Davant d'això, el govern igualment segueix assumint les tesis de les entitats financeres, no es planteja les mesures de la iniciativa legislativa popular i fa una proposta que és més del mateix. És a dir, semblant als decrets que ja va aprovar l'any passat, que afecten molt poca gent o una porció molt petita, i que no donen cap sortida als milers de persones que ja han passat pel procediment. Amb la qual cosa ja no és qüestió de dir a veure qui guanya, sinó que hi ha un problema que s'ha de resoldre, i la proposta de llei del Partit Popular que ara mateix hi ha sobre la taula no resol aquest problema.

Aleshores, nosaltres què farem? Evidentment, seguirem pressionant i interpel·lant el govern perquè faci aquesta modificació, perquè encara que no s'aprovis ara, el dimarts vinent torna a haver-hi una ponència conjunta; previsiblement, el Partit Popular tornarà a imposar el seu text, potser amb alguna millora en temes puntuals, marginals, però no en el fons de la qüestió. I això vol dir que, més o menys en deu dies o dues setmanes, pot estar aprovat aquest projecte de llei, que aniria al Senat. Si se segueix en aquesta línia i no es rectifica –nosaltres, fins a l'últim moment, estarem fent pressió perquè ho facin, perquè rectifiquin–, ens trobarem que hem de seguir interpel·lant, perquè si no s'aprova en aquest tràmit, no

vol dir que morin aquestes propostes, es poden seguir proposant i, de fet, aquest govern té molta afició als reials decrets, és a dir, a aprovar les coses per real decret en temes molt menys importants. Per tant, en qualsevol moment es podrien aprovar aquestes mesures per real decret.

El govern igualment segueix assumint les tesis de les entitats financeres, no es planteja les mesures de la iniciativa legislativa popular i fa una proposta que és més del mateix.

Seguirem fent pressió, però evidentment seguirem actuant per aturar la barbàrie, perquè hem de recordar que no estem aquí en una pugna ideològica, sinó que estem amb un problema real d'emergència. Aquí al darrere hi ha vides destrossades, hi ha vides en joc i s'ha de donar una sortida i una resposta a aquest problema, perquè si no, com a societat –insisteixo en això, i això implica a tothom–, no ens podrem mirar al mirall d'aquí a uns quants anys. Mirarem enrere i direm: «Com vam permetre que durant tants anys es vulneressin els drets humans del nostre país de manera sistemàtica?».

Afortunadament, la societat civil està responent, i ja no només són les plataformes, ja no només són els jutges, sinó que són els policies que es plantegen desobeir, són els funcionaris dels jutjats que ens contacten per veure com poden fer objecció de consciència en els procediments, són els periodistes que, més enllà de les pressions que puguin arribar des de la direcció del mitjà, busquen explicar la veritat del que està passant. Cada cop és més, i tothom s'està donant per al·ludit i està intentant respondre en la mesura del possible, i aleshores, malgrat la dificultat general, veient tot el que estem veient, veient aquestes petites grans victòries de reacció de la societat civil, que va molt per davant del Congrés i del govern, en aquest sentit sí que pensem que podem ser optimistes. Estem segurs que tard o d'hora ho aconseguirem, poden trigar més o menys a respondre a la pressió social, però no queda cap altra solució, perquè el problema, insistim, no desapareixerà. Ho deixo aquí, gràcies ■



ANTONI SERRA RAMONEDA

Gràcies per la invitació. Jo ja sabia els arguments de la senyora Ada Colau i aquesta petició, aquesta exigència que estan plantejant de la dació en pagament. Aleshores m'ha vingut al cap el següent: a l'Estat espanyol, el govern ha pres una posició molt diferent en el tema de la dació en pagament retroactiva, perquè de fet, la dació en pagament ja l'ha aplicada als promotors i, en canvi, no l'estan aplicant als particulars.

El govern ha pres una posició molt diferent en el tema de la dació en pagament retroactiva, perquè de fet, la dació en pagament ja l'ha aplicada als promotors i, en canvi, no l'estan aplicant als particulars.

Les entitats financeres, quan esclata la crisi, tenien dos tipus de deutors hipotecaris: els particulars, que vivien a les cases i tenien la hipoteca corresponent, i els promotors, que estaven construint els pisos, que quan la crisi esclata no els poden vendre i que es troben amb unes hipoteques que no poden pagar. I què fan? Doncs els entreguen, donen en pagament els pisos. En canvi, als particulars se'ls tracta d'una manera absolutament diferent. Jo suposo, i això el magistrat ho sap molt millor que jo, que aquesta diferència de tractament ve donada per una raó essencial: la limitació de la responsabilitat que tenen els promotors, i que, en canvi, els particulars no tenen. Els promotors, per cada promoció que feien, constituïen una societat anònima, que l'únic patrimoni que tenia era el terreny i l'edifici que estaven construint i, per tant s'adreçaven a l'entitat financera dient que no podien pagar i els deien: «Aquí tens terreny i edifici. I si no ho vols, m'és igual, no tinc res més». No tenien res més que això.

Per tant, quan l'Estat espanyol diu que la dació en pagament no es pot produir, amb el FROB (Fons de Reestructuració Reordenada Bancària) l'han produït. Els milions que ens acabarà costant el FROB, com a conseqüència de totes aquestes promocions que es van quedar els bancs i que ara han passat al FROB, ja veurem finalment com acaben. En canvi, per als particulars, el tractament, com bé s'ha explicat, ha estat absolutament diferent, s'ha produït un problema enorme. Les xifres que han donat avui els registradors de la propietat són inversemblants, per la importància que tenen, pel problema social que s'ha creat. I el que és estrany és que el govern sigui

tan poc receptiu a mesures que ajudin a pal·liar aquest problema, perquè és un problema d'estat, ja no és un problema de cada entitat financera aïllada, és un problema d'estat, de govern, i s'han de prendre mesures a nivell d'estat per intentar pal·liar-ho, si no resoldre-ho.

Contra la dació en pagament dels particulars hi ha dos arguments essencials que exposen els que no hi estan d'acord. Per una banda, la no-retroactivitat. Aquest sembla el principi sagrat: una llei no pot tenir efectes retroactius i, per tant, si la hipoteca es va signar anys enrere, ara no podem canviar les clàusules d'aquest contracte. Per una banda, sorprèn una mica aquest argument tan contundent, perquè de fet, si un revisa les mesures que ha pres darrerament el govern espanyol, veurem que a vegades la retroactivitat no els ha preocupat tant. Per exemple, si miren l'energia fotovoltaica, s'han construït una sèrie d'horts fotovoltaics, amb unes condicions determinades sobre els preus que caldria pagar pels kilowatts hora subministrats, i ara resulta que com a conseqüència que se n'han construït tants, el govern fa retroactiu un canvi de les tarifes que s'havien aplicat. Per tant, la retroactivitat és un argument sòlid des del punt de vista jurídic, però en canvi no sempre li tenen tant de respecte.

Si un revisa les mesures que ha pres darrerament el govern espanyol, veurem que a vegades la retroactivitat no els ha preocupat tant.

El segon argument que donen és el següent. Gran part d'aquestes hipoteques, que van ser donades en anys anteriors, en aquest moment ja no estan en poder dels bancs. Per què? Perquè els bancs i les entitats financeres el que van fer és emetre cèdules hipotecàries. Per entendre'ns, el que van fer és agafar hipoteques, fer-ne un paquetet i oferir-ho a estalviadors, molts d'ells a l'estranger. Al mercat de Londres, les entitats financeres espanyoles anaven col·locant cèdules hipotecàries, és a dir, unes cèdules que donaven un cert interès a aquell que les subscribia, però que tenien com a contrapartida les hipoteques que, en aquest moment –i encara avui– estaven vives. És clar, si ara es redueixen les condicions d'aquestes hipoteques, automàticament això afecta els tenidors d'aquestes cèdules hipotecàries, i com que, a més, molts d'ells són entitats financeres estrangeres,

això podria produir una reacció molt contrària al sistema financer espanyol, un sistema que, ja per si mateix, té una imatge bastant pobre internacionalment parlant, i el fet que ara es modifiqués això encara podria produir unes condicions més negatives.

D'altra banda, crec que la dació en pagament té un altre problema. És a dir, la senyora Colau parlava, per exemple, d'una entitat financera que veu que està posant una família al carrer perquè la família no pot pagar, perquè tots dos s'han quedat sense feina i les criatures s'han posat malaltes... Doncs hauria de prendre mesures, rebaixar el deute i ajudar que la família sortís del problema. Una altra entitat financera que té la sort que la família que viu en un dels pisos en què té una hipoteca no ha perdut la feina, no sortirà tan perjudicada. Per això dic que el problema no és un problema de bancs, és un problema de l'estat.

I precisament, jo portava aquí un article que m'ha semblat molt interessant i que va ser publicat en un diari fa una setmana més o menys, i que recorda una qüestió molt interessant. Com saben, la gran crisi del 1929 va començar a Wall Street i es va estendre per tot el món, però en tot cas, als EUA va tenir uns efectes devastadors. L'any 1933, als EUA estaven passant situacions molt semblants als desnonaments actuals i tots els problemes que això comporta. Què va fer el president dels EUA? El senyor Roosevelt, que era el president d'aquella època, va crear una entitat pública que va quedar-se tots els habitatges que havien de ser desnonats perquè no els podien pagar. Se'ls quedava l'entitat federal nord-americana i pagava al banc (no sé com fixava el preu, això caldria estudiar-ho) amb uns bons, uns bons a amortitzar en uns anys i amb un determinat tipus d'interès. Aleshores, qui gestionava la hipoteca no era ja el banc, sinó que era aquesta institució pública.

Què va fer aquesta institució pública? Rebaixar els tipus d'interès, allargar els períodes d'amortització i en determinats casos, fins i tot, rebaixar la quota que calia pagar o l'import del crèdit pendent, i així successivament. De tal manera que va ser l'estat americà qui es va fer càrrec del problema, i això evidentment va significar un cost per a l'estat americà i, per tant, per al contribuent americà. Però si no estic equivocat, les dades que donava el periodista eren que el programa del senyor Roosevelt va salvar 25 milions de famílies nord-americanes per 4.750 milions d'euros, és a dir, el 8,4% del producte interior brut (PIB) dels EUA en aquell temps.

El senyor Roosevelt, que era el president d'aquella època, va crear una entitat pública que va quedar-se tots els habitatges que havien de ser desnonats perquè no els podien pagar.

La xifra és important: 25 milions de persones són moltes famílies. Ja sé que els EUA són un país molt gran, però tot i això significa una porció important de la població americana. Els milions d'euros són considerables, però si un va a mirar, davant de la magnitud del problema, tampoc es pot considerar que sigui una xifra absolutament desmesurada. Quan en el cas espanyol veiem el que ens està costant el FROB i el que ens acabarà costant —que no ho sabem, però em temo que seran encara xifres bastant més crescudes—, crec que l'estat hauria hagut de prendre les mesures necessàries per implementar (no sé si ara ja ho està) al costat del FROB, un altre programa, del tipus americà, amb les modificacions que fossin convenients. I d'aquesta manera, no entrar en aquesta dinàmica en què tant de bo que la senyora Ada Colau i la seva plataforma tinguin èxit, però em sembla que els queda molt per fer ■



SANTIAGO VIDAL

Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Quan tens l'honor de compartir taula amb companys i amics del prestigi i de la qualitat professional com els que tinc a la meua dreta, ho diuen gairebé tot abans, i això fa que moltes de les notes que portes preparades per comentar ja no siguin necessàries, perquè serien reiteratives. I segon, perquè l'hora comença a avançar i ja s'ha posat molta carn a la graella, molts elements de reflexió, així que cal començar a parlar de tot això.

Em van demanar, des de l'Associació d'Amics de la UAB, que jo aportés, com a cloenda d'aquesta taula, una visió que pugui representar el col·lectiu judicial. Els jutges, amb tots aquests temes que són objecte de debat social en aquests darrers mesos, no només el d'avui, la veritat és que hem passat d'un paper totalment secundari (per altra banda molt lògic, perquè com sabeu perfectament, una de les funcions que ensenyen quan estem a l'escola judicial és que nosaltres som el puntal de conservar l'*status quo*) a això que ara estem veient: que jo estigui a l'esquerra de l'Ada Colau, i el José María a la dreta; em temo que farà que algun diari de Madrid, demà, quan vegi aquesta imatge, exclami: «Mira, Jesucrist antisistema i els dos traïdors al sistema». Espero que no, però ja sabeu que aquestes coses passen. Per sort, a la taula hi ha dues persones de seny: el professor Ramoneda i el moderador.

Feta aquesta petita anècdota, el que sí que és cert és que els jutges estem tenint un protagonisme no buscat, però que a mi m'omple de satisfacció. I m'omple de satisfacció per dos motius.

Els jutges estem tenint un protagonisme no buscat, però que a mi m'omple de satisfacció.

El primer, perquè una vegada per totes, un col·lectiu tan conservador com és el de la judicatura, els 4.756 jutges, si no m'equivoco, que actualment estem en actiu a Espanya –com sabeu perfectament, entre el 85% i gairebé el 90% dels quals es manifesten (els jutges no són neutres, això és una obvietat, però a vegades cal dir-ho) clarament d'ideologia conservadora, tan legítima com qual-sevol altra, que quedi molt clar. Ho dic perquè a vegades, a la gent que estem a Jutges per la Democràcia, que només som un 10% de la carrera judicial, l'opinió pú-

blica ens pregunta per què no fem moltes més coses. Però és clar, és que som això, un de cada deu, i això s'ha de tenir en compte–, doncs bé, estic molt content que la classe judicial, com a estament professional, hagi decidit fer un pas endavant i hagi assumit una de les obligacions que tenim. Almenys, el José María i jo l'hem tinguda sempre molt clara, que és fer realitat l'article 24.1 de la Constitució espanyola, que ens diu que la nostra funció és interpretar les lleis, i no només aplicar-les. Perquè per aplicar-les simplement, avui dia, amb els sistemes informàtics que hi ha, podríem donar totes les dades d'un cas i segur que la base de dades et trobaria una situació legal. Del que es tracta, però, és que no només sigui legal, es tracta que sigui just, i per tant, això no ho fa una màquina, sinó que ho fem les persones. Per tant, l'article 24.1 de la Constitució ens diu: «Senyor jutge, vostè interpreti les lleis vigents, no se les pot saltar, evidentment, perquè això és cosa del poder legislatiu, però interpreti-les d'acord amb la realitat social i partint de la premissa de la tutela judicial efectiva. De qui? De la part més feble». I evidentment, hi ha tot tipus de contractes, ara ens ho comentaven en José María i l'Ada Colau, que no són contractes negociats entre dues parts iguals, sinó en què hi ha una desigualtat d'inici que s'ha de corregir quan hi ha, efectivament, situacions abusives.

Deia, doncs, que estic content que el col·lectiu al qual pertanyo hagi fet aquest pas endavant, però permetin-me que sigui, en aquest sentit, una mica pessimista. Voldria que, d'aquí a uns mesos, l'opinió pública no us emportéssiu una decepció. El col·lectiu judicial, en aquests moments, ha fet aquest pas, o una part important dels nostres col·legues de professió, hem fet aquest pas, perquè realment s'ha sensibilitzat a l'hora de veure tots aquests drames humans. Però també perquè està indignat, i molt enfadat, amb l'actual govern. Per tant, siguem una mica sincers. L'actual ministre, el senyor Ruiz Gallardón, des que va prendre possessió, com tots vostès ja saben, està modificant la Llei Orgànica del Poder Judicial, per suprimir la poca independència que té actualment aquest òrgan de govern. Tots els últims ministres fa cinc anys que ens redueixen el sou, ens han suprimit una paga extra, no cobreixen cap de les vacants que s'estan produint; aquí a Catalunya tenim, en aquests moments, un 25% de places judicials que estan buides. Fins ara hi havia alguns interins o substituïts, però com que no hi ha diners, se'ls ha rescindit el contracte, i això significa que

ens demanen que treballem molt més. És a dir que aquí també hi ha un component, i no us vull enganyar, i és que el col·lectiu judicial està aprofitant l'empenta de tots aquests moviments socials per fer un pols amb el ministeri.

L'actual ministre, el senyor Ruiz Gallardón, des que va prendre possessió, com tots vostès ja saben, està modificant la Llei Orgànica del Poder Judicial, per suprimir la poca independència que té actualment aquest òrgan de govern.

I això què significa? Doncs que si d'aquí a uns mesos, o uns anys, la crisi econòmica millora, el ministre comença a aflluïxar i ens comença a tornar tot allò que ara de moment ens està prenent, doncs escolti, el col·lectiu judicial serà el que ha sigut sempre: un sector professional conservador, un sector professional que dirà: «La llei és la llei i nosaltres ens limitem a aplicar-la, i si hi ha alguna queixa, aneu al Congrés dels Diputats. No ens vingueu als jutges». La Llei Hipotecària és de l'any 1909 i fins a l'any 2010, em sembla, un company no va plantejar que hi havia un problema al Tribunal Constitucional. I, per cert, li van retornar la qüestió que havia plantejat amb una resolució gairebé ofensiva, li van dir que com se li acudia qüestionar el dret a la propietat i el dret als interessos, perquè ell deia que el fet que uns interessos que passen del 4,5%, només pel fet que estiguin en mora a partir de l'endemà passin al 29 i escaig per cent, és usurari. Li van dir que no es fiqués allà on no el demanen.

En canvi, ara ve el Tribunal de Justícia de Luxemburg i diu que això s'ha de moderar, i és veritat. El projecte de llei s'està debatent en aquests moments, no al Congrés dels Diputats, que és on s'han de debatre aquestes coses, sinó a la Comissió d'Economia que l'aprovarà, i anirà directament al Senat. Suposo que ja us deveu haver adonat, Ada, que us estan fent amb això una certa jugada, perquè el que han dit és que tenen raó i que ara només cobraran el triple. Per tant, del 4,5% o del 5% passem al 15%. Home, i per què no és com qualsevol altre sector de la societat, que quan reclama té dret al principal que se li deu, més els interessos legals de dos punts? L'interès legal del diner, perquè no hi han de perdre, i tenen tota la raó del món, més dos punts, o tres. Però no, sem-

bla que de moment passaran del 29% al 15% i ja tothom ha de quedar content. Per tant, és el que deia el José María, aquests pedaços i, permeteu-me una expressió molt catalana, allò de «peix al cove» o «la pastanaga». Anem amb compte amb això.

El projecte de llei s'està debatent en aquests moments, no al Congrés dels Diputats, que és on s'han de debatre aquestes coses, sinó a la Comissió d'Economia que l'aprovarà, i anirà directament al Senat.

Feta aquesta entrada, jo voldria dir-vos dues o tres coses en aquests deu minuts que em queden. La primera: aquesta evolució de sensibilitat em sembla que és molt bona, però sobretot voldria que l'opinió pública no caigués en el parany de pensar que el poder judicial estem impeding competències del poder legislatiu. Aquest és un missatge que ja s'està començant a vendre des de les instàncies corresponents, i no és això. Els jutges no pretenem legislar. Aquí se'ns posa una mica com a exemple el que va passar a Itàlia amb la interpretació alternativa del dret que es va fer durant uns anys determinats, i que no va acabar precisament gaire bé, és cert. Els jutges no pretenem envair competències dels legisladors, sinó que el que pretenem és dir-los que facin la seva feina, que la facin quan toca i que la facin bé. Això és el que fem.

Voldria que l'opinió pública no caigués en el parany de pensar que el poder judicial estem impeding competències del poder legislatiu. Aquest és un missatge que ja s'està començant a vendre des de les instàncies corresponents.

Per tant, són decisions valentes, penso que plenament legals i espero que justes, les que han adoptat persones com el meu company de Lanzarote, ahir mateix, que efectivament ha anul·lat, de cop, setze contractes hipotecaris per les clàusules i en té, si no ho he entès malament, vuitanta més a l'arxiu darrere seu, i que, per tant, probablement, també seran objecte de pronunciaments similars. Això és el que està donant un missatge al poder legislatiu, perquè qui té l'obligació legal i constitucional de solucionar el problema són ells, els diputats, que per això són els representants del poble. I per tant, si els representants d'aquest milió i mig de signatures que va

presentar la plataforma no ho solucionen, ho hauran de fer els jutges. I ho hauran de fer, no fent una aplicació de la llei, sinó una interpretació progressiva de la llei, d'acord amb els paràmetres que ens ha marcat la mateixa sentència del Tribunal de Luxemburg, ja que, gràcies a la qüestió prejudicial que va plantejar el José María, ara gaudim d'un cos jurídic sòlid sobre el qual recolzar-nos.

Voldria, si m'ho permeten, dedicar un parell de minuts a una qüestió jurídica, però també real del dia a dia, com són aquests assetjaments, l'escarni, els *escraches*, que es diu últimament. Sens dubte, ens fa la impressió que, si no és que hi ha un canvi d'orientació per part, no només de la Plataforma d'Afectats per l'Hipoteca, sinó d'altres moviments socials, ens haurem d'acostumar, cada dia més, a veure aquestes situacions. Jo com a jutge he de deixar molt clar que hi ha un conflicte entre dos drets fonamentals, en aquest cas el dret fonamental de la llibertat d'expressió de les persones que estan indignades per tot el que passa, i ofeses per com ha reaccionat el Congrés dels Diputats amb la seva majoria absoluta respecte de la iniciativa legislativa popular, i un altre dret fonamental, en aquest cas el dret a la intimitat, a la llibertat de la població, a la privacitat dels diputats.

Per tant, em sembla perfecte que es facin actes de pressió (mai violents, això ha de quedar molt clar, sempre han de ser pacífics) davant de les seus dels partits, davant dels organismes públics, però sobretot, que quan es facin davant dels domicilis particulars, o de qualsevol altre lloc on pugui estar un diputat o un senador, m'agradaria que en els propers mesos es continués fent de la manera que s'ha fet fins ara. És a dir, que fins al dia d'avui, i ja n'hi ha hagut uns quants, no hi ha hagut el més mínim incident, cap, i això és fantàstic, perquè en el moment en què hi hagi algun incident, ho aprofitaran. Els que estan interessats a fer-ho, ho aprofitaran. No té cap altre sentit la circular interna de la secretaria d'estat de seguretat que es va fer pública abans-d'ahir. Marcar tres-cents metres de distància entre la persona presumptament escarnida i el col·lectiu que vol manifestar el seu disgust significa que si ara som a Barcelona, i poso un exemple molt gràfic, si el senyor o la senyora diputada viu al carrer Bruc amb Mallorca, doncs els manifestants s'han de posar a Rambla Catalunya amb Aragó. És clar, vostès s'imaginen quin sentit té això? Què han de fer a Rambla Catalunya amb Aragó? Ni se n'assabentarà, el destinatari.

A mi em sembla molt bé que s'adopti alguna mesura de prevenció, però amb deu metres n'hi ha prou. Perquè amb deu metres ja no hi ha contacte físic, el senyor diputat o diputada pot entrar i sortir lliurement de casa seva, la seva família igual i els veïns de l'immoble tampoc tenen cap tipus de problema. Evidentment, si del que parlem és de violència acústica, doncs sí, és veritat. Això és una qüestió que va sortir fa un parell d'anys quan cada dimecres, algunes persones que estaven barrejades amb el moviment 15-M, van obstaculitzar l'accés dels diputats al Parlament de Catalunya. Allà hi va haver diputats als quals van donar empentes, hi va haver violència, se'ls impedia passar. Això és un pas que mai s'ha de fer, i estic completament segur que l'Ada Colau ho té molt clar, i la gent que representeu la plataforma, doncs, en aquest sentit, doneu les instruccions necessàries i espero que us facin cas perquè mai passi res.

Amb deu metres ja no hi ha contacte físic, el senyor diputat o diputada pot entrar i sortir lliurement de casa seva, la seva família igual i els veïns de l'immoble tampoc tenen cap tipus de problema.

Però jo sempre dic als representants polítics, i espero que vostès hi estiguin d'acord, i si no en el debat ho discutim, que en la seva nòmina hi van tres coses. Ells, a final de mes, a diferència de molts de nosaltres, que només cobrem una cosa, en cobren tres. He estat molts anys professor de l'Escola de Policia de Catalunya, dels mossos d'esquadra, i des del primer any sempre ho vaig dir als meus alumnes mossos. Els vaig dir que a final de mes, com que són càrrecs públics, i en política exactament igual, cobren a final de mes un sou (per als mossos sempre insuficient, tot s'ha de dir, i per als polítics potser no tant, tot i que ara, cada vegada més, ho estem delimitant, això). En primer lloc, cobren un sou, un salari. En segon lloc cobren amb insults i protestes, a vegades quan han de detenir algú, i a vegades també d'algun ciutadà que passa volant per allà, i veu com l'estan detenint i no sap ben bé què ha passat, però també s'hi posa, cosa que també hauriem de fer mirar, i això no vol dir que no hi hagi alguns excessos de força. I tres: cobren amb l'elogi i la satisfacció de l'agraïment que els dona aquell ciutadà al qual han protegit en un moment determinat, algú a qui han beneficiat d'alguna manera.

Per tant, tenen tres nòmines, i si no estan disposats a cobrar aquestes tres nòmines, s'han equivocat de professió. I els polítics igual. Són càrrecs públics i han d'acceptar, com una de les servituds del seu càrrec, que quan tenen un posicionament legislatiu que contradiu la immensa majoria dels ciutadans que els han elegit (a vegades se n'obliden, d'això), i obliden que senzillament són els nostres representants, quan succeeix això, han d'assumir que aquests ciutadans protestin i ho facin d'una manera que els molesta.

I finalment, podria recordar que a Catalunya, i això ha vingut una mica arran de la proposta que saben que ahir va començar a debatre's a la Junta d'Andalusia en relació amb aquest tipus de temes, aquí tenim una llei *non nata* (va quedar morta) de l'any 2007. El primer tripartit ja preveia una mica que tot això podia passar, i per tant aquesta llei preveia la qüestió de les expropiacions temporals de milers i milers de pisos que hi havia buits, sense ocupar. La llei preveia expropiacions definitives de pisos i d'altres tipus de locals que estaven en estat de ruïna, completament abandonats. I preveia també l'accés, a través de gestió municipal –es parlava d'un 25% d'aquest parc immobiliari– per facilitar el lloguer social. Com vostès saben, aquesta llei no va arribar a ser posada en pràctica. Del 2007 cap aquí, doncs, han passat uns quants anys, però la realitat ha demostrat que aquella era una bona llei. Que podríem tenir una bona llei que ara, fent balanç, hauria servit per pal·liar alguns d'aquests efectes.

El primer tripartit ja preveia una mica que tot això podia passar, i per tant aquesta llei preveia la qüestió de les expropiacions temporals de milers i milers de pisos que hi havia buits, sense ocupar.

Em consta que el ministre Ruiz Gallardón ja ha dit aquest matí, si vostès estan una mica al corrent, que com al Parlament d'Andalusia se li acudeixi aprovar això, evidentment recorrerà al Tribunal Constitucional i que ells ja saben –i no va mancat de raó– que el Tribunal Constitucional no ho permetrà. La qual cosa em porta a pensar –i torno a aquesta qüestió– quina és la funció dels jutges. La funció dels jutges és la de tutelar els drets dels més desfavorits, sempre dins del marge de la legalitat. I a vegades sembla que el Tribunal Constitucional, que és el màxim garant d'aquests drets fonamentals, oblida

aquesta funció. Sobretot pel seu sistema d'elecció, que com vostès ja saben, és un sistema absolutament pervers, i que fa que els dos partits majoritaris es reparteixin els cromos, com ja estan fent ara.

La funció dels jutges és la de tutelar els drets dels més desfavorits, sempre dins del marge de la legalitat. I a vegades sembla que el Tribunal Constitucional, que és el màxim garant d'aquests drets fonamentals, oblida aquesta funció.

Suposo que tots estan al corrent que el Consell General del Poder Judicial ha caducat el seu mandat, en alguns dels seus membres, i com ha passat en totes les últimes renovacions, de moment estan prorrogant els magistrats que no són jutges de carrera –que són la majoria, també ho hem de recordar, això–. N'hi ha molts que són expolítics, exdiputats, exsenadors, i evidentment els designa el partit del qual formaven part. Amb la qual cosa, la seva imparcialitat o –deixin-me matisar com a jutge– la seva «aparença d'imparcialitat» no és tan nítida com hauria de ser. Doncs bé, en aquests moments, com ja saben, des del ministeri s'està promovent una reforma d'aquesta llei orgànica, per via d'urgència, per tal que quedi ben lligat aquest repartiment de càrrecs de cara als propers cinc anys. Així anem malament, si el màxim òrgan judicial del nostre estat, del nostre presumpte estat de dret democràtic, no es regeix per normes transparents, nítides i clarament democràtiques.

Anem malament, si el màxim òrgan judicial del nostre estat, del nostre presumpte estat de dret democràtic, no es regeix per normes transparents, nítides i clarament democràtiques.

I amb això acabo, recordant-los que a més a més d'aquestes plataformes i tots aquests moviments, tot un grup, cada vegada més nombrós, de jutges, advocats, procuradors, registradors de la propietat, notaris, etcètera, han fet un manifest, el passat dia 3 d'abril de 2013, al qual qualsevol altre ciutadà, però només si és jurista, s'hi pot adherir. Aquesta plataforma és «Juristas por la ILP».

Per a tots el que vulguin llegir aquest manifest, no és un manifest tan radical o extremista, com es poden imagi-

nar, no hi ha les pretensions de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca, perquè ja sabem que a vegades per guanyar una guerra s'ha de perdre una batalla. Vosaltres feu molt bé de no renunciar a cap batalla, com el Cid Campeador, com diuen per allà a Madrid o a València, i endavant, però és clar, els juristes, com ha explicat molt bé el professor Serra Ramoneda, veiem totes les conseqüències que determinades decisions poden arribar a tenir en el mercat. I per tant, no es tracta de voler quedar bé. Es tracta de trobar el punt mitjà, d'equilibri, com moltes de les propostes que fem allà, entre elles defensar la retroactivitat, sobre la base d'un principi de la dació en pagament. Si les lleis penals, quan s'aproven, i són més favorables al reu, s'apliquen de manera retroactiva, per què les lleis civils, quan són més favorables a l'executat (ja no és un reu només, a sobre està executat) no han de ser retroactives?

Intentem-ho aplicar als principis generals del dret, i de totes les branques del dret, no només el dret penal, també el dret civil, i el dret social i qualsevol altre. Per tant, un dels punts en què sí que estem d'acord és aquest, el que passa és que és cert que s'haurien d'introduir molts matisos en aquesta dació en pagament. Vosaltres ja ho feu, en el sentit de dir que no s'ha d'aplicar a tothom, sinó a primers habitatges, a deutors de bona fe, que efectivament puguin acreditar causes sobrevingudes d'impossibilitat de pagament. Tot és qüestió d'introduir matisos, efectivament, però el principi general només el poden aprovar els legisladors, només el poden aprovar els diputats.

I per tant, estem davant d'un mal començament, pel fet que ja s'hagi negat, el partit amb majoria absoluta al Congrés dels Diputats de Madrid, a debatre aquesta nova llei al Congrés, que és on s'ha de debatre. Ho han passat per la Comissió d'Economia i després, a través d'un reial decret llei, ho passaran directament al Senat. Amb la qual cosa, ja es poden vostès imaginar que són poques les possibilitats de reformar a fons la legislació

hipotecària, més enllà del que estrictament sí que els obliga la sentència del tribunal, que lògicament s'ha centrat sobretot en el tema dels interessos moratoris abusius i de les clàusules. No ha pogut entrar en altres coses. Si no m'equivoco —i si no que el José María em corregeixi, perquè ell domina molt millor que jo aquesta qüestió—, em sembla que no hi ha ni una referència a la dació en pagament en la sentència. No n'hi ha ni una. També és lògic que el tribunal es pronunciï sobre el que se li planteja, no pot parlar de tots els problemes del país.

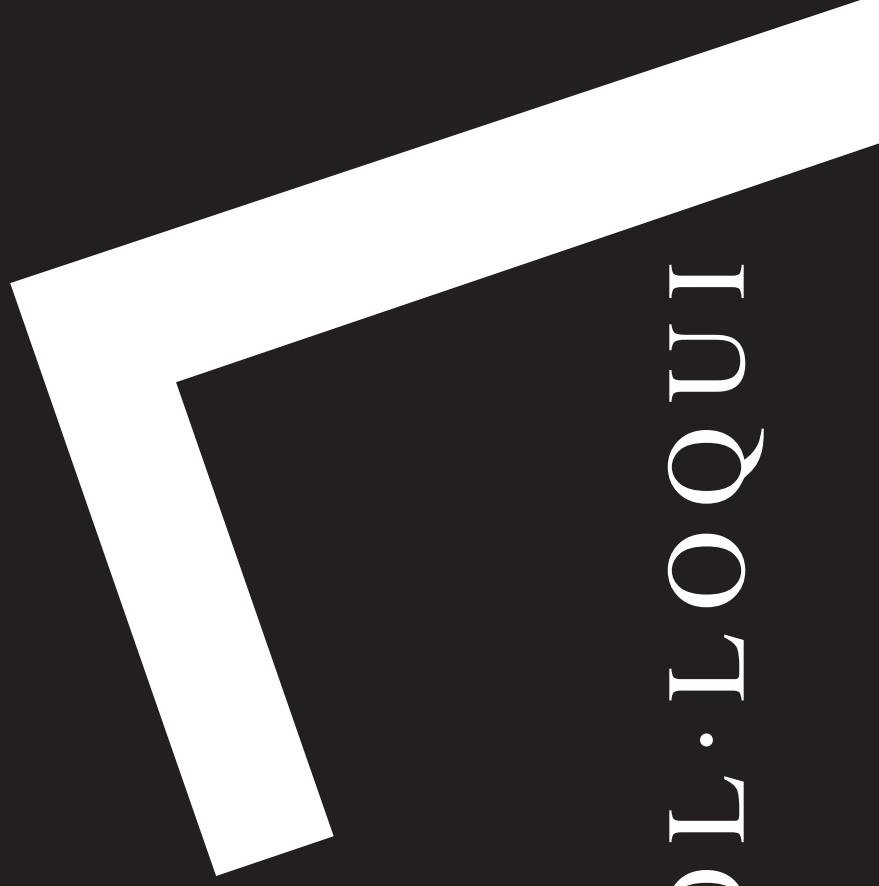
Així doncs, la reforma se centra a adequar mínimament els interessos, que els redueixen del 29 i escaig al triple del pactat; això ja és alguna cosa, és clar que sí, però no soluciona el problema. La persona que no pot pagar els interessos moratoris, és que no pot pagar, no ja el principal, que això ja és un tema, és que no pot pagar ni el doble, ni el triple, ni el quintuple, no és un problema de quanties, sinó que és un problema de concepte. Doncs, llevat d'adequar-lo als mínims que li exigeix aquesta normativa internacional que va qüestionar el José María Fernández Seijo, sembla que de moment no faran gaire cosa més.

Són poques les possibilitats de reformar a fons la legislació hipotecària, més enllà del que estrictament sí que els obliga la sentència del tribunal.

Que ho aconseguim, que tot això no es quedi aquí i que vagi endavant no depèn, únicament i exclusivament, dels moviments socials, no depèn únicament i exclusivament dels operadors jurídics, sinó que depèn, sobretot, de la ciutadania, de la societat. Si el poder polític comprèn que la ciutadania diu prou a tot un seguit de coses, això és una línia vermella, i haurà de reaccionar. I si no reaccionen, ja sé que falta molt temps per a les eleccions, però si no reaccionen, doncs, quan ens toqui votar-los, decidim en conseqüència. Gràcies ■

COL·LOQUI

DEBAT





JOAN BOTELLA

Moltes gràcies als quatre participants per l'interès, enorme, de les seves presentacions. Començarem doncs amb les preguntes del públic assistent. Hi ha una pregunta adreçada directament als magistrats; la senyora Teresa Cerentill diu: «Si tal com tot apunta, la jurisprudència acaba declarant abusives les clàusules hipotecàries, com caldrà que actuï la Fiscalia per buscar o exigir responsabilitats?» ■

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEJO

La Fiscalía, tanto en la ley de 1998 de cláusulas generales, como en la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000, sin necesidad de meter a nadie en la cárcel tenía instrumentos para haber atacado las cláusulas abusivas en los contratos a través de las acciones generales. Luego, sin necesidad de ser excesivamente abruptos, nuestro ordenamiento jurídico es del año 98, y hubiera podido, en defensa del interés público, poderlo plantear; estaba legitimado, porque aquellas cláusulas eran evidentemente abusivas —el Supremo lo acaba de decir de las cláusulas suelo de una entidad financiera—.

Entonces, creo que fiarlo todo a la Fiscalía es aventurado. Lo que sí que es verdad es que —y ahí coincido con Ada— este no es un debate ideológico, es un debate de técnica jurídica. Para cualquier jurista que maneje derecho comunitario —y derecho comunitario no es derecho internacional, el derecho comunitario se debería estudiar antes que los llamados derechos nacionales— debería llegar a las mismas conclusiones con los mismos instrumentos. La directiva del año 83 vencía su plazo de aplicaciones el 5 de abril del año 1995; por lo tanto, el Estado español está en mora, se ha retrasado dieciocho años en dotar a nuestro ordenamiento jurídico de los instrumentos habituales. Cuando alguien no paga su préstamo, se le aplican unos intereses moratorios, que podían ser del 29% y ahora van a ser del 12. Por lo tanto, no es tanto un problema de efectos retroactivos, sino de acreditar un perjuicio, es decir, que todas aquellas personas que se hayan visto afectadas por un proceso judicial que no haya tenido en cuenta esas garantías, si acreditan el perjuicio, podrían reclamar. Y de hecho, en sede

parlamentaria ya se han presentado enmiendas, donde se está pidiendo que se habilite un proceso de revisión de las ejecuciones que ya están archivadas, con el objeto de depurar una responsabilidad que se arrastra desde el año 1995.

¿Comportamientos delictivos? Sé que los hay. Yo estoy en un juzgado mercantil, la pista de experimentos más importante del derecho económico ahora mismo, y nosotros estamos viviendo prácticas que son absolutamente castigables y que tienen que ver, fundamentalmente, con la información que se ha trasladado y algunas operaciones. O sea, cómo las refinanciaciones a particulares en el año 2007-2008, con la idea de que se les daba más plazo y que se les daba oxígeno, al final han incrementado su volumen de deuda en cerca del 25%. Y en muchos casos, además, han arruinado a la familia, porque esas refinanciaciones han obligado a los avalistas. Entonces, comportamientos hay, lo que pasa es que yo creo que una acción colectiva, de carácter civil o de carácter penal, tal y como están los juzgados, podría ser incluso, paradójicamente, perjudicial.

Les pongo un ejemplo: algunas asociaciones de consumidores e usuarios interponen una demanda judicial pidiendo que se declaren nulas las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios de cuarenta y dos entidades financieras. Ahora ya no hay cuarenta y dos entidades financieras, pero en aquel momento, en el año 2010, sí que las había. La previsión que hay de la celebración de una audiencia preliminar está programada para el año 2014, y en los pleitos que tenemos en los juzgados —yo el lunes pasado tuve cinco— un ciudadano particular decía: «Oiga, mientras Madrid resuelve esto de las cuarenta y dos entidades y la asociación del consumidor, quíteme a mí mi suelo».

Y las entidades financieras están diciendo que espere-mos a que resuelva ya no Madrid, sino el Tribunal Supremo, para que pueda haber un tratamiento. Yo el otro día hice un ejercicio y dije en una de las demandas que alguien me dijera qué cifra estaba pidiendo el particular de devolución de dinero. Es decir, «que me quiten el suelo y que me devuelvan lo que he pagado de más». Y entonces hicimos una prueba y dijimos: «Digan ustedes una cifra sobre lo que pide la gente que se le devuelva. Díganme una, la que les parezca a ustedes razo-

nable, por aplicación de cláusulas suelo. 1.200 euros». Y la entidad financiera, que ya tiene una sentencia en el Tribunal Supremo de nulidad anunciada, dijo: «No, mire usted, yo, hasta el final, que se paralice, prejudicialidad, litispendencia...».

Es decir, ojo con fiarlo todo a los procesos porque los procesos son laberintos, y son laberintos complejos. Yo creo que ahora mismo, más que el castigo, que está bien, el problema es mirar al futuro. Y por lo tanto, solucionemos primero el problema y luego depuremos responsabilidades. Lo digo porque si abrimos procedimientos río para depurar responsabilidades, nos puede ocurrir que en el 2014 me tengan que volver a invitar los Amigos de la Autónoma, y yo en el 2014, espero no tener que estar hablando todavía de estas cosas ■

SANTIAGO VIDAL

Jo, si m'ho permeten, afegiria, en trenta segons, tres matisos. El que acaba de dir el meu company José María ho comparteixo íntegrament. El primer de tot és que suposo que ja s'adonen per què no es cobreixen les places de jutges, aquest 25%. Com menys siguem, menys capacitat de poder donar resposta a això, i per tant, si ara ja esteu assenyalant en l'àmbit civil el 2014, d'aquí a poc serà el 2015 i després el 2016. Per tant, això de la «planta judicial» que hauria de tenir actualment l'Estat espanyol, tenint en compte el nombre d'habitants i els onze milions i mig de plets que cada any hi ha, que hauria de ser de 7.000 jutges, doncs mirin, estem amb 5.400 i escaig i el 25% sense cobrir. Per tant, probablement, devem ser efectius realment treballant cada dilluns uns 4.000. Ara suposo que ho comencen a entendre, per què no es cobreixen: per raons pressupostàries, evidentment, però també per altres raons de fons, que expliquen altres coses.

I un matís pel que fa a la pregunta concreta de la Fiscalia. Què en pensem, els jutges, de la capacitat d'intervenció de la Fiscalia? Mirin, no deu ser perquè el codi penal vigent no tingui títols penals suficients per poder jutjar les conductes de totes aquestes entitats bancàries, alts càrrecs, etcètera. No és que no hi hagi prou tipus penals, que hi són; per tant, no fa falta cap reforma del codi

penal, amb el que tenim en tenim de sobres. El que s'ha de fer és aplicar-lo. Però els recordo que a diferència dels jutges, que som, entre cometes, independents, els fiscals estan sotmesos al principi de jerarquia. Al principi de jerarquia de qui? Del fiscal general de l'Estat. I qui nomena el fiscal general de l'Estat? El ministre de Justícia. Per tant, els fiscals, a mi em consta que fan el que poden, però si les ordres vénen de dalt, doncs ja ens podem imaginar que si ho hem de fiar a la capacitat de la Fiscalia, anem servits ■

JOAN BOTELLA

Hi ha una pregunta adreçada a l'Ada Colau sobre una dimensió que ha sortit poc, és en relació amb els avaladors. Es pregunta: «No és injust que un avalador hagi de respondre del 100% del deute? No creuen que per llei s'hauria de limitar, per exemple, a un topall, un màxim del 30%?» ■

ADA COLAU

Bé, això també ho podrien respondre els magistrats. Nosaltres, als avaladors els considerem afectats igual que els titulars. És a dir, que són víctimes igualment de l'engany i de la desinformació, de l'estafa, i a més es troben amb la mateixa problemàtica, i és que responen amb els seus béns presents i futurs de la totalitat del deute que es reclama. Amb la qual cosa són igualment afectats, com els titulars, i per tant, les mateixes demandes que demanem per als uns, les demanem per als altres. No sé si la clau està tant a limitar només la responsabilitat dels avals com a trobar una solució de limitació de la responsabilitat que serveixi per a tothom, tant per a titulars com per a avals ■

SANTIAGO VIDAL

Jo no sóc especialista en aquest tema, però per si algú hi està interessat, em permeto afegir-vos que aquí, a Catalunya, afortunadament, després d'un precedent de la secció civil a l'Audiència Provincial de Girona (la sentència, concretament, per si algú la vol anar a buscar, és de

16 de setembre de 2011), aquest tipus de reclamacions als avaladors, quan hi ha hagut evidentment aquest tipus de clàusules o interessos abusius, i quan són avaladors que responen també amb la totalitat dels seus béns –és a dir, hi ha un deutor universal que és el deutor principal, i un altre deutor universal, que és l'avalador–, les estan declarant nul·les. Perquè consideren que és una doble garantia totalment abusiva i excessiva. Per tant, el que m'agradaria és que aquesta doctrina o jurisprudència menor que està fixant l'audiència de Girona es fes extensiva a tot arreu de l'Estat espanyol ■

JOAN BOTELLA

Hi ha una pregunta, formulada per Ignasi Bouffard, em penso que va adreçada una miqueta a tothom, i és si «seria viable i eficaç plantejar al Tribunal Superior Europeu la qüestió de la dació en pagament, ja no només la dels interessos de mora, sinó la mateixa dació en pagament» ■

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEJO

Para poder elevar una pregunta al Tribunal de Justicia es necesario que haya una norma comunitaria que establezca un marco legal para los veinticinco países de la Unión. Entonces, no hay una norma que establezca instituciones como la dación en pago en el ámbito europeo. De hecho, hay países que no han tenido que pensar en la dación en pago, porque no hay ejecuciones hipotecarias. Por lo tanto sería técnicamente imposible.

Sí que es verdad que la Unión Europea está trabajando en dos directivas. Hay una directiva de noviembre del año 2011, que establece la necesidad de que los conflictos que tienen que ver con el acceso a la propiedad de la vivienda sean sometidos a una mediación obligatoria. Es una directiva que establece un elemento razonable, en la medida en que los instrumentos de mediación obligan a que ambas partes cedan en sus pretensiones y que el conflicto no necesariamente se tenga que resolver en claves jurídicas, sino que se resuelva en claves económicas y sociales.

¿Qué problema hay? Pues que en Europa, ahora mismo, no hay gente con la potencia suficiente en los gobiernos como para potenciar este tipo de directivas. Hay unos estudios previos sobre los problemas de sobreendeudamiento de consumidores y familias que deberían dar lugar a un tratamiento uniforme en materia de insolvencias de particulares. Nosotros tenemos un reglamento comunitario de insolvencias transfronterizas que se aplica con relativa frecuencia, pero sí que es verdad que el impulso de finales del siglo xx de los legisladores europeos, y aquí hay que volver a recordar a Delors, tiene muy poco que ver con la pereza de los actuales responsables de Europa.

Entonces también es una pena que en el ámbito europeo las normas de referencia que utilizamos tengan veinte años. Por eso no hay un marco legal para plantear la dación en pago, salvo que se pudiera plantear una cuestión prejudicial sobre si el mantenimiento de la deuda una vez terminada la ejecución es contrario a los intereses del consumidor. Lo que pasa es que, hace dos o tres años, cuando se planteó la iniciativa de la dación en pago, algunas entidades financieras se lo plantearon de manera seria, incluso en algunos foros de debate dijeron que estaban barajando la posibilidad de no presentar ejecuciones hipotecarias y acudir a otros procedimientos ejecutivos que hay en nuestro sistema, y que permitieran la recuperación de la deuda con cargo al bien. En concreto, las ejecuciones ordinarias.

Y a mí eso me hizo reflexionar. Hay veces que es necesario concentrar los esfuerzos en instituciones que manifestamente funcionan mal, pero el debate no está en la ejecución hipotecaria, el debate está en todo el sistema de ejecución. Podría ocurrir que una entidad financiera decidiera no presentar una ejecución hipotecaria, hiciera una ejecución ordinaria, y en la ejecución ordinaria reclamara el embargo de un piso que está hipotecado por él mismo. Y reclamara además, con carácter complementario, el embargo de las nóminas o de otros bienes del patrimonio del deudor.

Entonces, si nos ponemos muy contundentes con una de las salidas, a veces cuando Dios cierra una puerta, abre una ventana. De hecho, aquí se planteó, y además generó incluso una queja al máximo nivel internacional. Una entidad financiera muy importante vendió un paquete de

hipotecas a un banco de Ecuador, que se llama Banco Pichincha. Y lo que se preguntaban es: «¿Qué interés tendrá el Banco Pichincha en tener un piso en Moratalaz de un ciudadano de Ecuador?». Y el señor del banco Pichincha dijo que no, que él en lo que tenía interés era en embargarles las remesas de dinero que vienen a través del banco. Con lo cual, el presidente de Ecuador se tuvo que coger un avión e irse al defensor del pueblo, irse al Tribunal Europeo de Estrasburgo. Y claro, dijo que el piso de Moratalaz se lo quedara el banco, pero es que con la remesa que manda el señor del piso de Moratalaz, comen 25 personas.

Pero eso se produce, ¿y saben por cuánto vendió la entidad financiera el riesgo hipotecario que tenía de ciudadanos ecuatorianos? Por un 17%. No es que le perdonara un 17%, sino que se conformó con que el Banco Pichincha le dijera que de cada 100 le daba 17 euros. Por eso digo que creo que es un problema de estado, y que tiene que haber medidas legislativas directas y de ejecución inmediata. Porque al final el laberinto de la justicia no se lo recomiendo a nadie, y yo voy todos los días al juzgado, pero no les recomiendo que entren en esos laberintos ■

ANTONI SERRA RAMONEDA

A mí lo que me sorprende, entrando en este tema, es que la Federación Catalana de Cajas de Ahorro, hacia el año 90, creó una figura, que era el «defensor de los clientes» de las cajas de ahorros. Y fueron precisamente dos magistrados, sucesivamente, quienes ejercieron como tales, Cesáreo García-Aguilera y José Antonio Somalo, y la verdad, funcionaba muy bien. Y cuando digo que funcionaba muy bien, si miran las estadísticas, verán que casi en el 90% de los casos daban la razón al cliente. Por lo tanto, las cajas hubieran tenido que considerarlo más bien lesivo, pero la verdad es que funcionaba muy bien. A lo que sí que se obligaba, es a que el cliente que acudía al defensor tenía que renunciar a cualquier otra instancia. Lo que ocurrió, por sorpresa, fue que —y creo que fue este año— una señora que se encontraba con problemas de hipoteca vino a verme y me preguntó qué podía hacer. Le dije que se fuera a ver al defensor de los clientes, y me llamó al día siguiente y me dijo que desde el 1 de enero lo habían suprimido. Entonces, claro, me sorpren-

dió que fuera precisamente en este momento, cuando más importancia podría tener.

Y la otra cosa es eso de la dación en pago. En Estados Unidos hay estados donde se admite la dación en pago y estados en que no. Entonces hay un estudio, que hizo la Reserva Federal norteamericana, comparando las hipotecas concedidas por bancos en aquellos estados donde la dación en pago era legal, y se vio una diferencia. Los tipos de interés, más o menos lo mismo, no es que la dación en pago implicara un cambio. Donde se ve una diferencia es en el porcentaje de créditos sobre el valor que la entidad está dispuesta a dar. Quiero decir que, claro, si introduces la dación en pago obligatoria, automáticamente significa que la entidad financiera reduce. Los efectos indirectos esos son... ■

ADA COLAU

A mí esto me parece extremadamente positivo ■

ANTONI SERRA RAMONEDA

Sí, a mí también ■

ADA COLAU

O sea que haya prudencia en la concesión del crédito es una cosa necesaria en la economía de este país... porque conceder créditos alegremente nos ha llevado adonde nos ha llevado, a la burbuja inmobiliaria. Y de hecho, esto ha inflado los precios de la vivienda. Con lo cual, si fueran más responsables en la concesión de créditos, bajarían los precios de la vivienda y saldría ganando la población entera. Pero eso las entidades financieras lo utilizan como argumento contrario, pero no, me parece fantástico que ustedes sean más responsables en la concesión de crédito, porque me parece necesario para toda la economía.

Yo una cosa que quería aclarar con el tema de la dación en pago es que lo hemos explicado siempre en sede parlamentaria cuando hemos ido a comparecer, cuando se

nos ha consultado, lo que pasa es que luego no se destaca eso nunca porque no se quiere recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque insistimos, es una cuestión política y no técnica. Cuando nosotros hemos situado el debate en la dación en pago retroactiva, ¿por qué lo hemos hecho? No porque le tengamos una afición especial a esa fórmula. En ningún caso. Lo que queremos es resolver el problema, y entonces la dación en pago retroactiva sitúa claramente cuál es el problema y la solución más sencilla y clara. Ahora bien, si no se quiere abordar con dación en pago retroactiva, hay varias maneras de hacerlo, se puede hacer con un procedimiento concursal, que ahora mismo a nosotros nos parece que sería caro para el estado y largo en el proceso, o sea que sería bueno para el futuro, pero para todo lo que ya se ha hecho, o se busca una forma más ágil de resolverlo o vamos a estar empantanados judicialmente como sociedad, y como personas afectadas, durante mucho tiempo.

Pero bueno, se puede afrontar la vía concursal. Pero es que el Partido Popular no quiere ni hablar de esta vía. La vía concursal la han planteado varias formaciones políticas, sería como una versión indirecta de la dación en pago, para entendernos. Y tampoco se quiere abordar. Por eso estamos diciendo que técnicamente podemos discutir si estamos de acuerdo en el objetivo. Con la dación en pago retroactiva ponemos el objetivo sobre la mesa. ¿Y cómo llegamos a ese objetivo? Se puede hacer una amnistía bien acotada; o sea, se hacen amnistías para evasores fiscales, que tienen cuentas millonarias en Suiza, y en cambio no se puede hacer ninguna amnistía, ni un euro, a las personas trabajadoras que se quedan en paro, es que clama al cielo.

Es evidente que si hay voluntad política, se pueden hacer quitas, se pueden hacer amnistías, se puede hacer una vía concursal, se pueden hacer fórmulas de dación en pago para algunos casos, otra resolución para otros, o sea, que el problema no es técnico, insistimos. Y lo que hemos hecho con la dación en pago retroactiva es situar el objetivo que nos parece irrenunciable, que es que toda la gente que ha sido estafada con hipotecas abusivas, deben tener derecho a una segunda oportunidad, igual que se le está dando a las entidades financieras y a las inmobiliarias y al resto. Es esto lo que nos parece innegociable.

Luego, técnicamente, siempre se podrá discutir. Y recordad una cosa, que la dación en pago es una medida de mínimos, que no es ningún chollo. Que luego te lo presentan como si tú estuvieras pidiendo el cielo y ¿quién quiere entregar su vivienda y perder toda la inversión hecha? Estamos hablando de que la gente, y especialmente si ha habido refinanciaciones, pueden haber pagado ya 80.000, 100.000 o 150.000 euros, quiere decir perder esa inversión y perder tu casa, que es tu proyecto de vida y donde has puesto toda tu ilusión, donde te has imaginado construyendo un hogar. Nadie quiere hacer eso. La gente deja de comer antes que dejar de pagar la hipoteca. Entonces, presentar como una frivolidad la petición de la dación en pago es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía, no sólo a la de la gente afectada ■

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Yo creo que hay que introducir otro concepto para fortalecer la dación en pago. Creo que técnicamente la dación en pago sería posible en el marco de un proceso concursal y con los cortafuegos del proceso concursal. Pero habría que introducir algo que me parece importante y que no es nada revolucionario, y es el derecho a la segunda oportunidad. O sea que al final, a través de los instrumentos de la dación en pago, la minoración de la deuda, lo que se está planteando es la posibilidad de que el consumidor pueda volver en condiciones razonables al mercado. Por lo tanto, que vuelva a pagar impuestos, vuelva a tener ilusión para encontrar un trabajo que no le embarguen y, por lo tanto, es el *restart*.

Y ahí sí que creo, técnicamente, que en la ley concursal, con modificar una frase de un artículo, se podría establecer, porque ya está, yo todas las mañanas doy en pago, autorizo daciones en pago con quitas tremendas. Y el que estudie lo que es el Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), no deja de ser una entidad que lo que hace es comprar créditos muy baratos; se queda con el crédito y luego lo va a revender. Y en la ley concursal se tardaría 72 horas, con la modificación de los artículos, en establecer eso. Incluso con algunos cortafuegos razonables, como eso tan clásico de que si el deudor viene a mejor fortuna en

los cinco años siguientes, la posibilidad de reactivar determinadas deudas.

Si lo llevamos al campo ideológico y nos situamos en los extremos, es mucho más fácil decir que no a las cosas. Pero desde un punto de vista técnico jurídico, no hay ningún problema. De hecho, lo que explicaba el profesor Serra creo que es razonable. El riesgo hipotecario vinculado a promotoras es el 80% del pastel. Y el riesgo hipotecario que afecta a particulares, es el 20% del pastel. En ese 20% hay una morosidad del 4%. En el trozo de pastel del 80%, la morosidad se dispara al 80 y tantos por ciento. Resulta que estamos dispuestos a que la mayor

parte del pastel, las raciones grandes, tengan un régimen jurídico muy favorable, y la parte pequeña tenga un régimen jurídico absolutamente draconiano ■

JOAN BOTELLA

Amigues i amics, segur que seguirem molta més estona, però com els dèiem, avui teníem el compromís d'acabar a dos quarts de nou. Han quedat moltes coses al tinter i suposo que hi haurà més oportunitats per parlar-ne. Vull agrair molt sincerament als quatre ponents les seves brillantíssimes intervencions. Gràcies ■

EDITA
Associació d'Amics UAB

CORRECCIÓ I MAQUETACIÓ
<F12 serveis editorials>

DISSENY
info@barcelonasiesta.com

COORDINACIÓ
Irina Gimeno Coso

IMPRESSIÓ
Impressions Gràfiques Canigó



Associació d'Amics UAB

Universitat Autònoma de Barcelona
Torre Vila-Puig
Campus de la UAB

Telèfon 93 581 14 90
Fax 93 581 46 45
amics@uab.cat
www.amicsuab.cat



Col·legi de Periodistes
de Catalunya



Col·legi de Politòlegs
i Sociòlegs de Catalunya



Universitat Autònoma de Barcelona

Consell Social